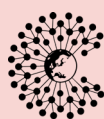


cities BEYOND GROWTH

**CIUDADES MÁS ALLÁ
DEL CRECIMIENTO**

Guía de políticas



**Commons
Network**



FUHEM
educación +
ecosocial



Oikos
Denk voorop



**INSTITUTE FOR
POLITICAL ECOLOGY**



Este documento fue elaborado conjuntamente por las siguientes organizaciones:

Commons Network (Países Bajos)

Transnational Institute (TNI) (Países Bajos)

FUHEM (España)

Institut za Politicku Ekologiju (IPE, Croacia)

Oikos (Bélgica)

NaZemi (Chequia)

Autores: Sophie Bloemen y Jo Braun

Con contribuciones de Martin Čech, José Bellver Soroa, Lavinia Steinfort, Rowan Mataram y Elze Vermaas.

Esta publicación fue traducida del inglés con la ayuda de la IA.

Ilustraciones y diseño: Julie Sauerwein Little by little studio

Commons Network

A Lab -106

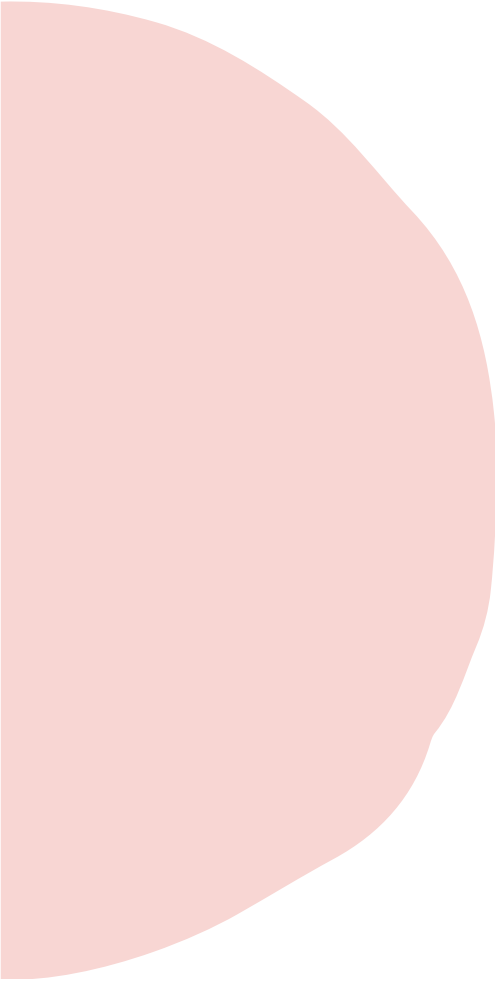
Overhoeksplein 2

1031 KS Amsterdam

Info@commonsnetwork.org

commonsnetwork.org

Amsterdam, julio de 2026



Resumen ejecutivo	4
Introducción	7
Conceptos clave y enfoques generales de política	10
Cuidado y suficiencia	
Transición: alianzas público-comunitarias,	
Construcción de riqueza comunitaria y democracia participativa	
Ámbitos	
Energía	16
Vivienda	20
Alimentación	24
Movilidad	28
Tecnología digital	32
Conclusión	37
Notas finales y referencias	39

Resumen ejecutivo

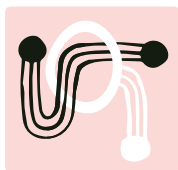
Esta guía, *Ciudades más allá del crecimiento*, ofrece a los responsables políticos y a las organizaciones de la sociedad civil un puente práctico entre el pensamiento del poscrecimiento y la economía del bienestar y la acción municipal concreta. Su argumento central: el modelo económico actual, orientado al crecimiento, está a la vez impulsando el colapso ecológico y profundizando la desigualdad social. Al ser los lugares donde la vida económica se desarrolla con mayor intensidad, las ciudades son el escenario en el que debe construirse una economía alternativa, basada en la suficiencia y el cuidado. Partiendo de prácticas urbanas reales, en su mayoría europeas, esta guía presenta tanto enfoques estratégicos generales como recomendaciones de políticas concretas en cinco ámbitos de necesidades básicas: energía, vivienda, alimentación, movilidad y tecnología digital.

Enfoques generales

Las tres estrategias institucionales se aplican a los cinco ámbitos tratados aquí, pero su relevancia va mucho más allá de ellos. (1) Las alianzas *público-comunitarias*, que transfieren la propiedad y el control de los recursos urbanos a arreglos compartidos entre los municipios y colectivos de ciudadanos, en lugar de dejarlos en manos de los mercados privados; (2) la *creación de riqueza comunitaria*, un modelo de desarrollo económico basado en la propiedad local, cooperativa y pública, organizado en torno a la contratación progresiva, el trabajo digno, la propiedad compartida, el uso justo del suelo y el poder financiero local; y (3) la *democracia participativa y deliberativa*, que integra asambleas ciudadanas, consejos de barrio y de alimentación, y herramientas de participación digital directamente en la toma de decisiones municipal.

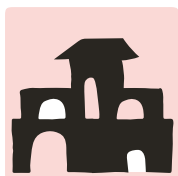
Recomendaciones de políticas por ámbito

Energía



Orientar la energía hacia la propiedad pública y comunitaria mediante la (re) municipalización; introducir estructuras tarifarias progresivas combinadas con límites de consumo para los grandes consumidores; y apoyar activamente la creación de comunidades energéticas ciudadanas a través de alianzas público-comunitarias.

Vivienda



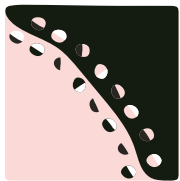
Desmercantilizar la vivienda transfiriéndola a modelos de propiedad pública gestionados democráticamente y a nuevas categorías de zonificación «asequible»/cooperativa; ampliar los programas de rehabilitación financiados mediante fondos rotatorios, aplicando al mismo tiempo el control de alquileres para evitar que los costes se trasladen a los inquilinos; y reforzar los derechos de los inquilinos junto con el apoyo a su organización.

Alimentación



Reconectar la planificación territorial con la política agroecológica de uso del suelo (por ejemplo, suelo público cedido a productores agroecológicos); adoptar normas de contratación pública sostenible para escuelas e instituciones públicas; reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro; y desarrollar capacidad institucional para la colaboración mediante consejos de política alimentaria y redes similares.

Movilidad



Regular y eliminar progresivamente el transporte privatizado de altas emisiones (zonas libres de coches, tarificación por congestión) incorporando salvaguardas de justicia social frente al desplazamiento; ampliar infraestructuras inclusivas para caminar, ir en bicicleta y transporte público; y apoyar iniciativas de movilidad compartida, incluido el acceso subvencionado para residentes de bajos ingresos.

Digital



Adaptar las normas de contratación y licitación para favorecer una tecnología democrática y no extractiva; establecer proveedores municipales de servicios de bienes comunes digitales; fomentar «centros de tecnología democrática» público-cívicos (intercambio de conocimientos, incubadoras); e invertir en infraestructura digital básica compartida (redes, protocolos, plataformas) como un servicio público, al igual que las carreteras o las redes eléctricas.

La guía incluye casos reales de «buenas prácticas» en cada ámbito y plantea una serie de preguntas orientadoras para ayudar a los responsables políticos a evaluar quién se beneficia actualmente de la política local, dónde es más necesaria la transformación, y cómo podrían rediseñarse de forma integrada la propiedad, la gobernanza y la participación ciudadana en todos los ámbitos. En las prácticas y políticas analizadas en esta guía, se repiten de forma constante tres patrones: desmercantilización, democratización y redistribución.

Prácticas en toda Europa



- Carbon Co-op, Manchester; Reino Unido
- Cooperativa energética Schöna, Alemania
- Federación Austriaca de Viviendas de Beneficio Limitado (Austrian Federation of Limited-Profit Housing Associations)
- Community Action Tenants Union, Irlanda
- Deutsche Wohnen & Co enteignen (Expropiar a Deutsche Wohnen & Co), Berlín, Alemania
- Voeding Verbindt (La Alimentación Conecta), Lovaina, Bélgica
- Pluk!, agricultura sostenida por la comunidad, Ámsterdam, Países Bajos
- Ciudad de 10 minutos, Utrecht, Países Bajos
- Transporte público gratuito, Tallin, Estonia
- Som Mobilitat, Cataluña, España
- Protocolos abiertos, Beckn, India

Las distintas prácticas analizadas en la sección de ámbitos de esta guía

Preguntas críticas para los responsables políticos

- 1.** *¿Quién se beneficia y cuáles son los costes sociales de las políticas de su ciudad en los distintos ámbitos de esta guía (energía, vivienda, alimentación, movilidad, tecnología)?*
- 2.** *¿Qué ámbitos de su ciudad se beneficiarían de una transformación, o la necesitan urgentemente?*
- 3.** *¿Cómo le ayudan los ejemplos de esta guía a repensar y remodelar una política actual hacia una economía más democrática y una mayor riqueza comunitaria?*
- 4.** *¿Alguno de estos enfoques se relaciona con prácticas ya presentes en su ciudad?*
- 5.** *¿Cómo puede aumentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas pública en el rediseño de la propiedad, la gobernanza y la toma de decisiones en materia de cuidados, energía, vivienda, alimentación, movilidad e infraestructura digital?*
- 6.** *¿Cómo puede su ciudad abordar estos distintos ámbitos de forma integrada?*
- 7.** *¿Qué tensiones y compromisos deben abordarse?*
- 8.** *¿Qué actores necesita reunir para lograr el cambio que desea construir?*

Introducción

Esta guía de políticas para *Ciudades más allá del crecimiento* describe prácticas y políticas que permiten a los entornos urbanos prosperar más allá del crecimiento del PIB. Aunque las ideas del poscrecimiento y de la economía del bienestar ganan cada vez más visibilidad, las vías concretas de cambio han permanecido en gran medida poco exploradas. Esto puede dificultar traducir la ambición en acción. Esta guía ofrece explicaciones accesibles y conocimientos prácticos que conectan los principios del poscrecimiento con la política real, tendiendo un puente entre la visión y la práctica. Contiene aprendizajes y estrategias para que la ciudadanía y los organismos públicos de las ciudades aumenten su capacidad de transformación y aceleren su transición en clave de poscrecimiento en tiempos de emergencia climática. La guía se basa en prácticas y políticas ya existentes en ciudades mayoritariamente europeas, pero también recurre a otros contextos cuando resulta pertinente.

La necesidad de hacer la transición hacia una economía que funcione dentro de los límites planetarios y sea más justa socialmente es evidente. Nuestro sistema económico actual es insostenible y nos ha llevado a una crisis ecosocial más amplia e interconectada, en la que el colapso ecológico y la desigualdad social se refuerzan mutuamente. Las ciudades son los lugares donde las prácticas económicas moldean directamente la realidad cotidiana. La mayoría de las personas viven en ciudades, y lo que sucede en ellas tiene un impacto desproporcionadamente grande.

El modelo económico actual, orientado al crecimiento y al beneficio, dependiente de prácticas intensivas en carbono y extractivas, está dañando la salud planetaria al generar emisiones de CO₂ y numerosos otros perjuicios ambientales.¹ Con 7 de los 9 límites planetarios identificados por la ciencia ya superados, el sistema económico actual conducirá al colapso de los ecosistemas a menos que experimente una transformación profunda.²

Dado que las ciudades se encuentran entre los mayores emisores de carbono, reducir sus emisiones y su huella ambiental resulta clave. Nuestras ciudades funcionan como lo hacen debido al elevado flujo de materiales, que depende en gran medida del suministro constante de energía. Se necesita energía para calefacción, cocina, producción de alimentos, movilidad e infraestructura digital. La continua dependencia de las ciudades de los combustibles fósiles es uno de los principales motores del problema, y sin embargo, ampliar las renovables por sí sola no puede satisfacer nuestra demanda energética en constante crecimiento. La actual expansión de las fuentes renovables, la llamada «transición energética», no sustituye a los combustibles fósiles, sino que amplía el uso total de energía.³ Además, las emisiones no son el único problema, ya que el crecimiento es inseparable del impacto material. La propia energía renovable depende de la extracción de minerales, lo que está vinculado a graves repercusiones para las comunidades locales y los ecosistemas.⁴

El tejido social de las ciudades europeas también se está deshilachando. Los efectos negativos de las culturas de consumo y de las culturas laborales competitivas orientadas a la productividad resultan imposibles de ignorar, a medida que la ansiedad y la soledad se

generalizan.⁵ Además, las concentraciones de riqueza sin precedentes en manos de unos pocos han producido peligrosas asimetrías de poder, erosionando la estabilidad de nuestras democracias parlamentarias y el orden geopolítico internacional. Esta inequidad se refleja estructuralmente en las ciudades, por ejemplo, en el fuerte aumento de los precios de la vivienda y el alquiler, que ha ampliado la brecha entre quienes pueden permitirse una vivienda digna y quienes no. Combinado con el aumento de los precios de la energía y un parque de viviendas mal aislado, esto ha agravado el riesgo de pobreza energética entre numerosos hogares. Del mismo modo, la forma en que actualmente se produce, procesa, distribuye, consume y desecha la alimentación depende en gran medida de la energía y es un motor principal de las injusticias sociales y la crisis ecológica. En las últimas décadas, los sistemas alimentarios mundiales se han industrializado cada vez más y se han estructurado según las lógicas del crecimiento económico y la acumulación.⁶

Las tecnologías digitales, cuyo control se ha concentrado en gran medida en un pequeño número de grandes corporaciones tecnológicas privadas, están en gran parte reforzando y acelerando estas dinámicas extractivas a través de plataformas centralizadas y prácticas como la vigilancia masiva. Las necesidades energéticas de los centros de datos, ahora impulsadas por el auge de la IA, resultan casi incomprensibles.⁷ También aquí, el crecimiento sigue siendo el mantra rector, aunque sus beneficios sociales sigan sin estar claros.

Vemos los efectos del sistema económico actual cada día, a través de sequías, inundaciones, incendios, la profundización de la desigualdad social, la pobreza, la precariedad, las crisis de salud mental y el malestar popular. Los resultados políticos también son evidentes: una profunda erosión de la confianza pública en las instituciones, una creciente inestabilidad geopolítica y el resurgimiento del fascismo. Si queremos revertir esta situación y avanzar hacia la prosperidad dentro de los límites planetarios, tendremos que cambiar drásticamente la forma en que satisfacemos nuestras necesidades.

¿Cómo hacemos la transición hacia una economía socialmente y ecológicamente sostenible? ¿Qué pueden hacer las ciudades? En esta guía, presentamos primero los conceptos clave y varias políticas generales. A continuación, exploramos cinco ámbitos de necesidad básica: energía, alimentación, vivienda, movilidad y tecnología digital. Cada sección presenta una serie de prácticas del poscrecimiento y describe las políticas clave que las ciudades pueden adoptar para apoyarlas.

Informe sobre justicia global y hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento

En 2026, dos importantes informes dotaron a la agenda «más allá del crecimiento» (es decir, la idea de que la política debe priorizar el bienestar y la suficiencia por encima de un PIB en constante aumento) de un notable peso institucional y rigor técnico.

Global Justice Report: A Plan for Equality and Prosperity within Planetary Boundaries, dirigido por el economista Thomas Piketty y sus colegas, es el primer plan mundial plenamente cuantificado que combina la reducción de la desigualdad, la disminución de las emisiones y la vida dentro de los límites planetarios en un único marco coherente hasta el año 2100.

Olivier De Schutter, publicó una detallada Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza, Olivier De Schutter, publicó una detallada *Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento*, en la que se exponen 80 propuestas de política concretas en ámbitos que van desde el trabajo de cuidados hasta la gobernanza democrática. Así pues, algunos de los economistas más destacados del mundo e instituciones de la ONU están tratando ahora el pensamiento «más allá del crecimiento» como una orientación política viable.

Parte 1: Conceptos clave y políticas generales

Conceptos clave: cuidado y suficiencia

«El cuidado es todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye (no solo) nuestros cuerpos, a nosotros mismos (sino también) nuestro entorno, todo lo cual buscamos entretejer en una red compleja que sostiene la vida.»

Joan Tronto, *Democracy: Markets, Equality and Justice*, 2013⁸

Para hacer la transición hacia una economía socialmente y ecológicamente sostenible, debemos dejar de tratar la economía como algo separado de su entorno, como hacen los modelos neoclásicos, y en su lugar entenderla como algo integrado en la sociedad y la naturaleza. Esto implica situar en el centro dos conceptos principales: el cuidado y la suficiencia.

Situar el cuidado en el centro coloca la salud de las personas, las comunidades y el medioambiente en el núcleo de la organización social, tratando tanto el trabajo de cuidados remunerado como el no remunerado como el fundamento de una sociedad sostenible, un antídoto contra el hipercapitalismo y el neoliberalismo.⁹ La producción, el comercio y el abastecimiento dependen tanto de los recursos naturales como del trabajo de cuidados reproductivo en los hogares, las comunidades y la cultura. Esta interdependencia exige que el cuidado y la administración responsable ocupen un lugar central. También implica reconocer lo que realmente permite a las personas prosperar. El crecimiento del PIB, centrado en la acumulación de capital, no equivale al bienestar humano.¹⁰ Aunque el crecimiento en su día iba de la mano de una prosperidad creciente, esto ya no se cumple para las personas en las ciudades europeas en las últimas décadas. Más allá de cierto umbral, el bienestar depende menos del consumo que de la comunidad, la conexión, el sentido y las relaciones, mientras que la igualdad sigue siendo uno de los indicadores más sólidos del bienestar colectivo.¹¹

El crecimiento sin fin, y la extracción que lo sustenta, no es, por tanto, ni posible ni deseable. La tarea consiste en construir una economía y una sociedad en las que la lógica extractiva y mercantilizadora del capital ya no domine, y en las que puedan florecer relaciones sociales no transaccionales, como la convivencialidad y la comunidad. Esto significa una economía que sirva a las comunidades en lugar de extraer de ellas, regenerativa en lugar de despilfarradora: una economía guiada por la **suficiencia**.¹²

La **Suficiencia** no pregunta cómo maximizar la producción y el consumo, sino cómo garantizar suficiente energía para mantener el calor, suficiente alimento para comer bien, suficiente vivienda para vivir con dignidad, suficiente tiempo para cuidarnos mutuamente. Pregunta cuánto es suficiente, y para quién, teniendo en cuenta los límites ecológicos.¹³ La suficiencia no es austeridad. Para la mayoría de las personas en las ciudades europeas, significaría más: más seguridad, más tiempo, más conexión, no menos; es el consumo de quienes están en la cúspide el que necesita contraerse. Desplaza la medida del éxito del flujo de materiales hacia los resultados: bienestar, seguridad, tiempo, conexión.

Este giro hacia el cuidado y la suficiencia requiere un cambio cultural, pero también una economía en la que las personas controlen las condiciones fundamentales de sus vidas: alimentación, salud, energía, educación, vivienda, infraestructura digital. Nadie es verdaderamente libre cuando sus necesidades básicas escapan a su propio control, y sin embargo esta falta de poder es actualmente la norma. Esto exige, por tanto, verdaderos procesos democráticos: las decisiones sobre el uso de los recursos, la creación de valor y quién se beneficia no pueden dejarse únicamente en manos de los mercados, sino que deben someterse a la deliberación colectiva. La transformación ecosocial, en los ámbitos de la energía, lo digital y otros, debe configurarse democráticamente para servir al interés colectivo.

Sin embargo, recuperar la autonomía también implica desplazar los modelos de propiedad de la privatización hacia la propiedad colectiva y pública, y del maximizar el valor excedente hacia producir lo que realmente se necesita. La transición solo puede llegar hasta cierto punto si el tejido productivo subyacente de la economía, quién posee las empresas, en beneficio de quién operan y cómo se relacionan con los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas, sigue organizado en torno a la primacía del accionista, la acumulación de capital y la mercantilización de bienes y servicios esenciales. Transformar los sistemas económicos en torno a la suficiencia y el cuidado requiere, por tanto, transformar las propias organizaciones económicas.¹⁴

Para medir el bienestar y la prosperidad de las comunidades, pueden utilizarse indicadores de bienestar de valor múltiple. Se trata de marcos integrales utilizados para medir el progreso social más allá de las métricas económicas tradicionales como el PIB. Estos sistemas evalúan una amplia gama de dimensiones, como la salud, la educación, el medioambiente y las conexiones sociales, para ofrecer una visión más holística de la calidad de vida y la sostenibilidad.¹⁵ Ejemplos de ello son el índice de bienestar y el Better Life Index de la OCDE.¹⁶

Enfoques generales de política

La transición requiere tanto la adopción de estas prácticas y modelos de propiedad colectiva como la infraestructura institucional para apoyarlas. Antes de adentrarnos en los ámbitos específicos, analizaremos tres enfoques clave de política general. Esto incluye alianzas estructurales público-comunitarias que trabajan para democratizar la economía, políticas específicas para construir riqueza comunitaria y control colectivo, así como nuevas instituciones democráticas que fomentan la democracia participativa y deliberativa.

Alianzas público-comunitarias: colaboración institucional en la desmercantilización

Las Alianzas público-comunitarias (APC) son acuerdos de colaboración en los que los gobiernos locales se asocian directamente con colectivos ciudadanos, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas o grupos comunitarios para gestionar activos o servicios públicos. Estos modelos hacen hincapié en la propiedad compartida, el bienestar comunitario y la toma de decisiones localizada, por encima de la maximización del beneficio privado. Las APC ofrecen así una alternativa al binomio Estado-mercado que subyace a las asociaciones público-privadas (APP), las cuales dependen de los intereses de inversión de los actores privados y relegan el interés público a un segundo plano. En cambio, las APC combinan la agencia democrática de la ciudadanía con la estabilidad institucional de la administración pública, transfiriendo la propiedad y el control de los recursos urbanos a manos de la ciudadanía.

Las APC pueden considerarse modelos institucionales liderados por los comunes, que ofrecen un terreno para la «comunalización» de la ciudad. Los **comunes** son recursos compartidos y marcos de relaciones sociales gestionados por una comunidad. A menudo se trata de sistemas de abastecimiento en los que las comunidades gestionan democráticamente un determinado recurso, como una plaza, un huerto, una cooperativa energética o un centro comunitario. Recursos como el agua, la tecnología, el conocimiento y la vivienda pueden gestionarse como bienes comunes.¹⁷ En los últimos años, ciudades como Barcelona, Bolonia, Nápoles, Gante y Ámsterdam, entre otras, han desarrollado estrategias orientadas a los comunes y redes municipales que permiten y promueven las APC.¹⁸ El enfoque varía según la ciudad y abarca desde los espacios urbanos (Bolonia), los edificios (Nápoles) y los solares vacíos (Barcelona) hasta la estrategia alimentaria (Gante), los centros de barrio y el mantenimiento de zonas verdes públicas (Ámsterdam).¹⁹

Las *Alianzas Público-Comunes* son una forma específica de APC. Las comunidades de comunes —grupos que gestionan colectivamente activos compartidos— pueden asociarse con las autoridades públicas para coproducir y cogestionar democráticamente esos recursos, estableciendo una *empresa conjunta*. Una APC de este tipo puede, por ejemplo, gestionar un supermercado o una cooperativa de vivienda. Un papel clave será que, a diferencia de los propietarios privados que privatizan el beneficio, las APC pueden utilizar el beneficio para reinvertirlo en el sector. Puede, por ejemplo, emplearse para desarrollar otro supermercado en régimen de APC en el barrio, u otra vivienda de alquiler asequible. Aquí los municipios tienen interés en apoyar a un organismo externo basado en los comunes en lugar de en lo privado, precisamente porque el valor excedente se destina a cumplir objetivos de interés público.²⁰

La (re)municipalización es un enfoque afín, más visible en el sur de Europa y en Alemania, que lleva los servicios a la propiedad y el control público-locales. En el ámbito energético, esto significa trasladar la generación, la distribución o el suministro de manos privadas a la propiedad municipal, permitiendo que las decisiones sobre inversión y suministro sirvan al interés público. Esto puede adoptar diferentes formas: *liderada por la autoridad pública* (el ayuntamiento se hace cargo directamente), *liderada por la comunidad* (grupos ciudadanos o cooperativas impulsan la toma de control) y *alianzas público-comunitarias* (gobernanza compartida entre el municipio y los residentes o las cooperativas energéticas). En cada caso, el objetivo es el mismo: sacar un recurso de necesidad básica de los mercados privados extractivos y llevarlo a una propiedad responsable ante las personas que dependen de él.²¹

Construcción de riqueza comunitaria: economías y comunidades locales prósperas

La Construcción de Riqueza Comunitaria (CRC) es un modelo de desarrollo económico que transforma las economías locales partiendo de que las comunidades tengan propiedad y control directos de sus activos. Aborda en su núcleo la desigualdad de riqueza y la fuga de capital, con el fin de generar una prosperidad económica ampliamente compartida y una sostenibilidad ecológica. Prevé que los organismos públicos desempeñen un papel fundamental en el fomento de un ecosistema diferente, y ofrece un enfoque integrado que las autoridades públicas pueden emplear para lograr las reformas necesarias.²²

La Construcción de riqueza comunitaria se apoya en una historia larga y rica, que incluye los movimientos cooperativos, la tradición socialdemócrata y las actividades comunitarias de justicia económica. Los movimientos actuales en favor de una economía más democrática han seguido moldeando el enfoque de construcción de riqueza comunitaria, que combina *planteamientos de arriba abajo y de abajo arriba*. Varias ciudades de Estados Unidos y del Reino Unido son conocidas por haber reorganizado con éxito sus economías mediante estrategias de CRC. Otros gobiernos han empezado a explorar este enfoque, entre ellos el Ayuntamiento de Ámsterdam y el Gobierno escocés.

La Construcción de riqueza comunitaria se centra en una propiedad amplia y democrática en una variedad de formas, desde la local y cooperativa hasta la comunitaria y pública, de modo que más personas puedan compartir la riqueza generada y tener control sobre sus condiciones económicas. El enfoque consta de cinco pilares:

i) Contratación progresiva: utilizar el poder adquisitivo de las instituciones tanto públicas como privadas para apoyar a las empresas locales. ii) Propiedad no extractiva o plural: alejarse de una economía en la que los activos económicos están mayoritariamente en manos de grandes empresas privadas, y llevarlos a manos de las comunidades y las autoridades públicas. La CRC promueve así empresas de propiedad local, democráticas o de vocación social. iii) Uso socialmente justo del suelo y la propiedad: utilizar los activos comunitarios en beneficio de la población local. iv) Poder financiero local: desarrollar sistemas financieros locales, aprovechando la riqueza que existe localmente. v) Trabajo digno: garantizar salarios dignos y empleos de alta calidad.²³

Democracia participativa y deliberativa: participación activa en lugar de falta de poder

Una parte importante de la democratización de la toma de decisiones consiste en ralentizar los procesos y empoderar a la ciudadanía a través de modelos de gobernanza participativa. Esto se hace posible cuando los organismos públicos integran paneles ciudadanos representativos, como asambleas o jurados, en la toma de decisiones formal, para abordar cuestiones complejas mediante el debate y la deliberación informados.

La deliberación consiste en sopesar pruebas y considerar una amplia gama de perspectivas en busca de puntos en común. Puede ayudar a desbloquear la acción cuando los responsables de la toma de decisiones están estancados o se enfrentan a la resistencia de una pequeña

parte de la comunidad. Órganos deliberativos como los consejos de barrio, los consejos de alimentación o las asambleas ciudadanas crean espacios democráticos para que grupos de personas ampliamente representativos aprendan juntos, aborden la complejidad, se escuchen mutuamente y encuentren puntos en común sobre soluciones.

Una asamblea ciudadana es un grupo de personas seleccionadas por sorteo (una selección aleatoria diseñada para garantizar la representatividad demográfica) que dedican un tiempo estructurado a informarse sobre un tema, escuchar a expertos y deliberar conjuntamente para llegar a recomendaciones consensuadas dirigidas a los responsables políticos. El sorteo garantiza que el grupo refleje la diversidad real de la comunidad. Para ser eficaz, el proceso suele requerir el compromiso formal de una autoridad pública de responder a las recomendaciones y actuar en consecuencia. Las asambleas ciudadanas se han utilizado en todo el mundo en cuestiones que van desde la política climática hasta la planificación urbana y los presupuestos.²⁴

Las herramientas de democracia digital pueden habilitar estos procesos en línea y pueden ser utilizadas por los gobiernos y la sociedad civil para facilitar la toma de decisiones participativa. Aplicaciones como [Decidim](#) y [CONSUL](#) se utilizan ampliamente para los presupuestos participativos y las propuestas de política. Plataformas como [Loomio](#) y [Pol.is](#) permiten que grandes grupos de personas participen en encuestas estructuradas y abiertas, y en la toma de decisiones colaborativa.

Estos procesos y herramientas, cada vez más adoptados por los gobiernos locales para aumentar la confianza y reducir la polarización, pueden ofrecer a los responsables políticos recomendaciones legítimas y aplicables.²⁵

GRENOBLE: LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN ACCIÓN

Grenoble es un centro reconocido de democracia participativa y deliberativa en Europa, que integra convenciones lideradas por la ciudadanía, consejos de barrio y una sólida participación cívica directamente en la política municipal. Estos mecanismos complementan al gobierno representativo al dar a residentes seleccionados aleatoriamente y comprometidos una voz directa en la toma de decisiones. Los mecanismos clave incluyen:

Convenciones Ciudadanas por el Clima. Ciudadanos seleccionados aleatoriamente deliberan durante varios meses para redactar propuestas viables destinadas a la neutralidad de carbono regional.

Mecanismo de Interpelación Ciudadana. Permite a los residentes y contribuyentes de bienes inmuebles (mayores de 16 años) presentar propuestas legales de interés colectivo directamente al municipio, sin pasar por los mecanismos tradicionales de petición.

Conseils Citoyens Indépendants (CCI). Consejos independientes que combinan a voluntarios y miembros seleccionados aleatoriamente (por sorteo). Pueden plantear preguntas orales en el consejo municipal, gestionar su propia asociación y poner en marcha talleres de proyectos.

Asambleas Ciudadanas de Alimentación. Un órgano participativo centrado en la política alimentaria.

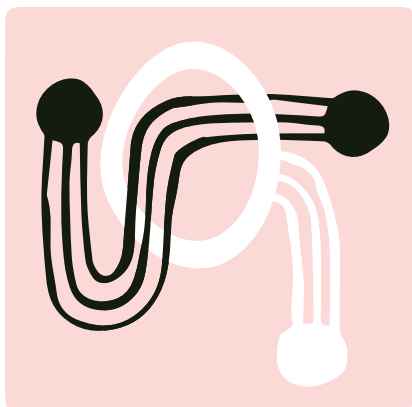
Presupuesto participativo. En marcha desde 2015; una partida bienal de 1,8 millones de euros para proyectos propuestos por la ciudadanía o colectivos.

Codecisión del presupuesto municipal (en desarrollo). Una ampliación anunciada que permitirá a los residentes ayudar a definir el presupuesto municipal completo, más allá de la partida participativa ya existente.

Ámbitos

Esta sección analiza cinco ámbitos de necesidad básica: energía, vivienda, alimentación, movilidad y tecnología digital. Para cada ámbito, primero trazamos el panorama actual y sus principales desafíos, luego esbozamos un enfoque de poscrecimiento, antes de pasar a prácticas concretas y recomendaciones de política que podrían ayudar a las ciudades a satisfacer las necesidades de las personas de forma más justa y sostenible.

Energía



La elevada demanda de energía, en particular en los países industrializados del Norte Global, no solo sirve a los intereses de las empresas de combustibles fósiles, sino que también es la causa fundamental del devastador cambio climático. La energía representa más de tres cuartas partes del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, siendo los combustibles fósiles todavía la principal fuente de generación de electricidad y calor.²⁶

En las últimas décadas, muchos gobiernos de todo el mundo han apoyado, en cierta medida, la transición de los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles hacia los renovables.

Sin embargo, el crecimiento de las renovables no ha sustituido a los combustibles fósiles, sino que se ha sumado a la demanda energética total que acompaña a la electrificación.²⁷ Dicho de otro modo, sostener un crecimiento continuo en las economías capitalistas requiere un enorme aumento de la extracción de recursos, ya sea para las renovables o para otros fines.

La transición hacia las renovables depende de minerales y metales críticos cuya extracción, al igual que la de los combustibles fósiles, provoca daños ambientales, violaciones de los derechos humanos y acaparamiento de tierras.²⁸ Mientras tanto, la urgencia de reducir el consumo energético se pasa sistemáticamente por alto, ya que los actores privados de toda la cadena energética, desde la extracción hasta el suministro, se benefician de un mayor consumo. El afán de lucro dominante que subyace al sistema energético actual socava tanto la transición hacia las renovables como la búsqueda de la suficiencia energética.

Mientras la producción y el consumo de energía siguen expandiéndose, 666 millones de personas no tienen acceso a la electricidad.²⁹ En Europa, más de 41 millones de personas se ven afectadas por la pobreza energética y no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada ni pagar sus facturas.³⁰ Las zonas urbanas son los principales lugares donde se manifiesta la pobreza energética y donde esta se cruza con el mal aislamiento de la vivienda, la precariedad alimentaria y de transporte, así como un acceso limitado a los servicios sociales y a la infraestructura digital.³¹ Los grupos de población marcados por el género, la racialización y el empobrecimiento se ven afectados de forma desproporcionada por la pobreza energética y sus efectos negativos sobre la salud y el bienestar mental.³²

El pensamiento y las estrategias del poscrecimiento ofrecen soluciones que van más allá de ampliar las renovables o confiar en el mercado para llevar a cabo la transición energética. La

suficiencia y la democracia energética ofrecen una visión concreta de cómo los gobiernos locales, junto con la ciudadanía, pueden aumentar el bienestar, la participación y la autonomía en y a través del diseño de los sistemas energéticos. La suficiencia energética busca garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas sin sobrepasar los límites planetarios.³³ La democracia energética, por su parte, reclama estructuras de propiedad colectiva y la participación ciudadana en los procesos de diseño y toma de decisiones de los sistemas energéticos.

Situar los sistemas energéticos bajo una propiedad pública y comunitaria responsable desafía la extracción de valor por parte de las grandes corporaciones energéticas y los actores privados, y en su lugar convierte a la energía en un bien común. Redefinir legalmente la energía como recurso compartido y derecho humano ofrece la palanca necesaria para eliminar eficazmente la pobreza energética.

En 2022, Honduras aprobó una legislación para convertir la energía en un bien público, transformando la electricidad de un producto puramente comercial en un servicio social fundamental. La ley se proponía garantizar electricidad gratuita para los hogares de menores ingresos, lo que beneficiaría a las 900 000 familias más pobres del país. La legislación contenía una cláusula que permitía al gobierno hacerse cargo de los activos energéticos si la renegociación de los contratos con las empresas energéticas privadas no se ajustaba a la nueva ley. Estas empresas privadas podrían entonces pasar a propiedad pública o verse presionadas para cumplir con las normas socioambientales.³⁴

Los gobiernos locales pueden liderar la recuperación de la infraestructura energética privatizada y apoyar la participación ciudadana para democratizar el sistema energético. Para avanzar hacia un sistema energético más allá del crecimiento, los esfuerzos municipales deben ir acompañados de una recuperación de la energía frente al mercado a escala nacional.³⁵ Hoy en día, nueve de cada diez países que lideran la transición energética cuentan con sistemas energéticos de propiedad pública.³⁶



Buenas prácticas

Carbon Co-op: las alianzas público-comunitarias combaten la pobreza energética

En el área metropolitana de Manchester, alrededor del 15,5 % de todos los hogares vive en situación de pobreza energética.³⁷ Se trata de uno de los porcentajes más altos de todo el Reino Unido, y se combina con un parque de viviendas envejecido y mal aislado. Para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2038, la ciudad de Manchester ha identificado la vivienda energéticamente eficiente como una prioridad política clave.³⁸ Sin embargo, los programas de rehabilitación financiados con fondos públicos que reducen el impacto ecológico negativo de las viviendas mal aisladas siguen siendo inaccesibles para muchos hogares de bajos ingresos.³⁹ Aquí es donde entra en juego la cooperativa Carbon Co-op, que aumenta la accesibilidad y la aplicación de los programas disponibles entre los hogares de bajos ingresos que viven en vivienda social.⁴⁴ Carbon Co-op colabora con las autoridades

locales, los proveedores de vivienda y las comunidades, y ha puesto en marcha, por ejemplo, el proyecto «Retrofit for All» (Rehabilitación para todos). A través de este proyecto, Carbon Co-op ha permitido un enfoque de la rehabilitación más centrado en las personas, creando redes con actores públicos y cívicos, facilitando el intercambio de conocimientos, proporcionando recursos dirigidos a los inquilinos y capacitando a los residentes de bajos ingresos para acceder a los programas de rehabilitación y ponerlos en práctica.

Municipalización liderada por la comunidad en Schönaú (Alemania)

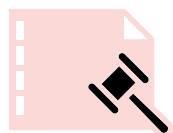
Tras el desastre de Chernóbil, los residentes del pequeño municipio de Schönaú se organizaron para tomar el control democrático de su red eléctrica local y generar energía a partir del agua, el viento y el sol. En 1997, los «Stromrebellen» (rebeldes de la electricidad) convirtieron a Schönaú en el primer municipio alemán en abandonar el carbón y la energía nuclear.⁴⁰ Ofreciendo tarifas que fomentan el ahorro energético y ampliando la red de calefacción, la cooperativa energética Schönaú sigue trabajando por una transición energética social y ecológicamente justa. Mientras que Schönaú es un ejemplo de municipalización liderada por la comunidad, en otras ciudades fueron las autoridades locales las que tomaron la iniciativa de municipalizar el sistema energético.⁴¹

En las últimas décadas, ha surgido una gran cantidad de comunidades energéticas en Europa y otros lugares, contribuyendo a la participación democrática en la generación y distribución de energía. 2.500 comunidades energéticas europeas, y sus 2 millones de ciudadanos activos en la transición energética, forman parte, por ejemplo, de la creciente red REScoop.⁴² A pesar de estos éxitos, las comunidades energéticas, junto con las autoridades públicas, deben seguir situando de forma continua a las personas afectadas por la pobreza energética en el centro de un sistema energético reestructurado y diversificado.⁴³



Conclusiones clave

- 1. Energía debe abordarse como un bien público y situarse bajo una propiedad pública y comunitaria democrática.*
- 2. La suficiencia energética garantiza que la transición hacia las renovables se traduzca en una disminución de la demanda energética total y en una distribución justa de los recursos disponibles, más allá del crecimiento y dentro de los límites planetarios.*



Recomendaciones de políticas

Convertir la energía en un bien público y trabajar hacia una propiedad pública y comunitaria responsable de los sistemas energéticos a todas las escalas

- Las estrategias de (re)municipalización ofrecen vías clave para democratizar los sistemas energéticos y aplicar diseños centrados en las personas y el medioambiente.

- Los municipios, las iniciativas ciudadanas y las organizaciones de la sociedad civil deben evaluar qué vía de municipalización se adapta mejor al contexto local (Satoko et al., 2020; véase la nota final 21):
 - I. Municipalización liderada por la autoridad pública
 - II. Municipalización liderada por la comunidad
 - III. Alianzas público-comunitarias
- Los actores municipales y las alianzas público-comunitarias deben enmarcar sus esfuerzos a nivel local dentro de una firme defensa de la recuperación de la energía frente al mercado a escala nacional.

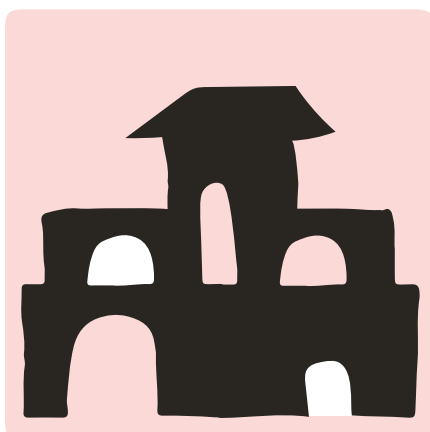
Introducir una tarificación energética basada en los ingresos, combinada con subvenciones y políticas de límites

- Las políticas de tarificación energética actuales se basan predominantemente en un modelo regresivo, en el que los hogares de menores ingresos gastan una mayor proporción de su renta disponible en energía que los hogares de mayores ingresos. Las empresas públicas de suministro energético pueden movilizar su autoridad legal para introducir esquemas de tarificación energética basados en los ingresos, que cobren a los consumidores en proporción a su renta disponible y garanticen un acceso asequible a la energía para los hogares afectados por la pobreza energética.
- Si no se dispone de autoridad tarifaria para modificar el esquema tarifario energético local, los municipios pueden subvencionar a los hogares afectados por la pobreza energética proporcionando bonos energéticos, programas de rehabilitación accesibles, electrodomésticos eficientes, servicios jurídicos y de asesoramiento, etc.
- Límites a los beneficios de las empresas de suministro y al elevado consumo energético de los consumidores adinerados y la industria, con el fin de avanzar hacia la suficiencia energética. Las autoridades públicas pueden aplicar tarifas por bloques crecientes, que aumentan el precio unitario de la energía a medida que aumenta el consumo, pero deben evaluar críticamente cualquier consecuencia negativa para los consumidores vulnerables.

Apoyar la creación de comunidades energéticas como parte de una estrategia municipal en torno a las alianzas público-comunitarias

- Los gobiernos locales pueden asumir un papel activo en el apoyo a la creación de comunes energéticos, proporcionando legislación clara y accesible, así como herramientas y subvenciones para que la ciudadanía y los trabajadores creen sus propias cooperativas energéticas.
- Invertir en alianzas público-comunitarias y redes es clave para facilitar el intercambio de conocimientos y fomentar la participación ciudadana en una transición energética democrática. Esto puede restaurar la confianza en los gobiernos locales y aumentar la legitimidad de la expansión de las renovables y la suficiencia energética en general.

Vivienda



En las últimas décadas, la vivienda se ha convertido en una hipermercancía, tratada como un objetivo especulativo en lugar de como un derecho humano. Esto se refleja en el fuerte aumento de los precios de la vivienda y el alquiler, que crecen mucho más rápido que la renta disponible, con miles de millones en beneficios destinados a las grandes corporaciones inmobiliarias.⁴⁴ En promedio, los precios de la vivienda en la UE han aumentado hasta un 60 % desde 2015, mientras que los precios de alquiler y los costes energéticos también han seguido subiendo de forma continua.

Alrededor de uno de cada diez europeos no puede pagar el alquiler o la hipoteca a tiempo.⁴⁵ En cambio, la disponibilidad de vivienda social ha disminuido significativamente, en gran parte debido a la privatización y a la enorme venta de vivienda de propiedad pública en las últimas tres décadas.⁴⁶ Todo ello ha ampliado la brecha entre quienes pueden permitirse una vivienda digna y quienes no, profundizando la precariedad habitacional y aumentando el riesgo de desplazamiento para muchos habitantes de las ciudades.

Tras la crisis financiera mundial de 2008, los precios del alquiler en Dublín aumentaron drásticamente, provocando un incremento del sinhogarismo. En el centro de Lisboa, la ciudadanía necesita pagar el 116 % del salario neto medio portugués por un apartamento de un dormitorio, lo que hace que la vivienda sea inasequible para la gran mayoría.⁴⁷ Los desahucios, la gentrificación (verde) y las viviendas convertidas en hoteles y alquileres turísticos de corta estancia expulsan a la población local del mercado competitivo, empujándola hacia condiciones de vivienda precarias en la periferia de las ciudades.

Las condiciones de vivienda precarias y la escasez de vivienda asequible no son fenómenos nuevos, especialmente para las poblaciones de bajos ingresos y los grupos marginados en centros urbanos cada vez más densos. Sin embargo, los enfoques políticos dominantes para abordar la compleja crisis de la vivienda se reducen continuamente al paradigma de «construir, construir, construir», impulsando una agenda claramente procrecimiento.⁴⁸

No obstante, la investigación muestra que ampliar el parque de viviendas no se traduce automáticamente en una vivienda más barata para todos; más bien provoca un aumento drástico del impacto ecológico negativo del sector de la vivienda.⁴⁹ Actualmente, la vivienda representa alrededor del 52 % de la huella material de la UE.⁵⁰

Una *perspectiva poscrecientista* cuestiona la lógica orientada al crecimiento que moldea hoy el sector de la vivienda y sus políticas. El acceso a una vivienda digna se convierte en un requisito fundamental a la hora de construir sociedades que prioricen el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios. En lugar de permitir la extracción ilimitada de valor a partir del aumento de los precios inmobiliarios, los enfoques poscrecimiento reimaginan la vivienda como un recurso compartido, un bien público y el fundamento del sentido de pertenencia a un lugar.

Poner en práctica estrategias poscrecentistas ayuda a cuestionar la mera ampliación del parque de viviendas y, en cambio, guía una reevaluación crítica de la vivienda existente, preguntando quién la posee, cómo se utiliza y si se asigna según la necesidad social en lugar del beneficio privado. Esto puede volver a situar los espacios públicos y los espacios de cuidado en el centro de la planificación urbana, ambos ingredientes esenciales para sociedades prósperas. Redistribuir el espacio y desmercantilizar la vivienda ofrece vías para combatir las causas fundamentales de los desahucios y el sinhogarismo.⁵¹ Esto, a su vez, aumenta la cohesión social en los entornos urbanos y puede ayudar a reducir las desigualdades. El creciente número de cooperativas de vivienda, modelos de propiedad colectiva de la vivienda, vivienda compartida y comunidades de convivencia son, además, ejemplos destacados de cómo la ciudadanía practica activamente principios y toma de decisiones democráticas en la vida cotidiana.⁵²



Buenas prácticas

El modelo austriaco: vivienda para las personas y sin ánimo de lucro

Hoy en día, la histórica Federación austriaca de viviendas de beneficio limitado (LPHA) proporciona vivienda a alrededor del 24 % de la población austriaca.⁵³ Las asociaciones miembro presentan estructuras de propiedad diversas, incluidas cooperativas, empresas municipales y privadas. Sin embargo, todas operan bajo el marco de la Ley de vivienda de beneficio limitado y se adhieren a estrictas regulaciones que garantizan la asequibilidad, la calidad y la reinversión de los excedentes en la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas sin ánimo de lucro y de beneficio limitado a través de fondos rotatorios.⁵⁴

La financiación pública ha contribuido significativamente al éxito del modelo austriaco. Revela cómo las alianzas público-comunitarias a largo plazo pueden contribuir a la estabilización del mercado de la vivienda y a la reducción del impacto ecológico del sector. Combatiendo tanto la crisis de vivienda como la pobreza energética, programas complementarios como Wohnschirm (Paraguas de Vivienda) apoyan a los inquilinos que enfrentan deudas de alquiler o energía, y Housing First ayuda a las personas sin hogar a conseguir una vivienda permanente.⁵⁵

Asequibilidad a través de la organización: iniciativas de inquilinos

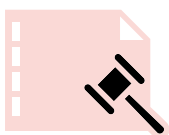
Irlanda: la Community Action Tenants Union (CATU) organiza a los inquilinos para avanzar hacia «hogares para todos». ⁵⁶ La CATU aborda las condiciones de vivienda precarias mediante la acción directa, como la eliminación de moho, la rehabilitación, el apoyo a la resistencia frente a las subidas de alquiler y la prestación de asesoramiento legal. El sindicato también ofrece una plataforma para la construcción de comunidad en muchas ciudades irlandesas y capacita a los inquilinos para hacer frente a los intereses de beneficio de las corporaciones inmobiliarias y los propietarios. La CATU refuerza los derechos de los inquilinos y amplifica su voz en un sistema de vivienda marcado por importantes desequilibrios de poder entre propietarios e inquilinos.

Berlín: la campaña «Deutsche Wohnen & Co enteignen» (Expropiar a Deutsche Wohnen & Co) demostró el potencial transformador de la organización de inquilinos.⁵⁷ En un referéndum celebrado en 2021, el 59 % de los votantes berlineses apoyó la expropiación de las mayores corporaciones inmobiliarias de la ciudad, lo que transferiría alrededor de 250 000 viviendas a la propiedad colectiva. Organizando a los inquilinos bajo el lema «Para que Berlín siga siendo nuestro hogar», la campaña abogó por un sector de la vivienda organizado democráticamente, protección legal frente a la reprivatización y un compromiso vinculante con la justicia social y ecológica. Aunque el Senado de Berlín no ha aplicado el referéndum, la campaña puso de relieve el potencial de una gobernanza democrática de la vivienda y la necesidad de que las autoridades públicas responsables prioricen la vivienda asequible por encima de los beneficios corporativos.



Conclusiones clave

- 1. El acceso a la vivienda debe tratarse como un derecho humano para todos, y el parque de viviendas disponible debe redistribuirse según las necesidades sociales y no según intereses orientados al beneficio.*
- 2. Los modelos de vivienda pública, cooperativa y comunitaria pueden ofrecer una vivienda asequible y organizada democráticamente, al tiempo que reducen el espacio y los impactos ecológicos del sector.*



Recomendaciones de políticas

Desmercantilizar la vivienda

- Desprivatizar la vivienda (social) y fomentar estructuras de propiedad municipal o cooperativa es una estrategia clave para abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda en las ciudades. Los gobiernos locales deben evaluar las opciones para transferir la vivienda privatizada a un bien común gestionado democráticamente y comprometerse firmemente a erradicar el sinhogarismo.
- Desarrollando nuevas categorías de zonificación, como «vivienda subvencionada» o «cooperativas de vivienda», el departamento de planificación de una ciudad puede garantizar que la propiedad del suelo cambie efectivamente y quede reservada para el bien común. Las parcelas clasificadas dentro de la nueva categoría pueden adquirirse fuera de las estructuras de mercado financiarizadas. Esto contribuye al control de alquileres y apoya la creación de cooperativas de vivienda.

Ampliar los programas de rehabilitación junto con el control de alquileres y la reducción de la vivienda vacía

- En lugar de construir nuevas viviendas, los gobiernos locales pueden ampliar los programas de rehabilitación para abordar las carencias de infraestructura verde en el parque de viviendas existente. Los fondos rotatorios son una herramienta financiera bien establecida dentro del sector de la vivienda sin ánimo de lucro y de beneficio limitado para asegurar fondos destinados a la rehabilitación de vivienda social, y pueden ser adoptados por los gobiernos locales para la vivienda pública.
- Es necesario que unas regulaciones claras para el sector de alquiler privado exijan compromisos de rehabilitación socialmente justos. Los municipios pueden introducir límites al alquiler para que los costes no se trasladen a los inquilinos de menores ingresos. Las autoridades públicas deben examinar y abordar las lagunas existentes en las regulaciones actuales de control de alquileres.
- Los municipios pueden reducir la vivienda vacía, por ejemplo mediante una regulación más estricta de la propiedad de segundas residencias, los alquileres de corta estancia y las plataformas asociadas orientadas al beneficio.

Reforzar los derechos de los inquilinos y apoyar la organización comunitaria

- Los gobiernos locales dependen de la colaboración con los sindicatos de inquilinos y las asociaciones de vivienda para desarrollar un marco de política de vivienda legítimo e integrarlo con otros ámbitos políticos, como la energía y la movilidad.
- Los municipios pueden implementar controles y regulaciones estrictos para evaluar y abordar las lagunas existentes que benefician a los propietarios, y apoyar a los inquilinos con asesoramiento legal.
- Las autoridades públicas pueden proporcionar la infraestructura y las regulaciones orientadas a los inquilinos para apoyar la organización comunitaria.

Alimentación



La alimentación está en el núcleo de cómo prosperamos y nos sostenemos. Es una necesidad básica y un elemento clave en la producción y reproducción de nuestra vida urbana. La alimentación conecta las ciudades y las zonas rurales, vinculando a la población urbana con las comunidades rurales a través del flujo de bienes y recursos entre ellas. Sin embargo, la forma en que actualmente se produce, procesa, distribuye, consume y desecha la alimentación es un motor principal de las injusticias sociales y la crisis ecológica. En las últimas décadas, los sistemas alimentarios mundiales se han industrializado

cada vez más y se han estructurado según las lógicas del crecimiento económico y la acumulación.^{58,59, 60}

Los sistemas alimentarios, en su día orientados a nutrir tanto a las comunidades urbanas como a las rurales, se han expuesto cada vez más a la especulación financiera, mientras que el acceso a la tierra agrícola se ha vuelto prohibitivo para muchos pequeños agricultores. La concentración del poder de mercado, la propiedad de la tierra y la biotecnología en manos de un pequeño número de corporaciones agroalimentarias ha consolidado su dominio tanto sobre los mercados alimentarios mundiales como sobre los sistemas alimentarios locales.⁶¹ Los costes de esta concentración recaen de forma desproporcionada sobre las comunidades locales y los medios de vida, especialmente en el Sur Global, donde la dependencia de semillas, agroquímicos y combustibles fósiles controlados por corporaciones, así como del acceso a los mercados globales, sigue profundizándose.

En la UE, el sector agrícola es responsable de aproximadamente el 11 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de la pérdida de biodiversidad, la alteración de los recursos de agua dulce, el cambio de uso del suelo, como la deforestación, y los desequilibrios en los ciclos de nutrientes.^{62,63} Al mismo tiempo, la propia producción de alimentos se ve negativamente afectada por sequías, inundaciones, la disminución de la diversidad, el deterioro de la salud del suelo y el cambio de las condiciones climáticas. Por tanto, el modelo agrícola industrializado dominante pone en peligro los propios fundamentos de nuestros sistemas alimentarios. Los beneficios de las grandes corporaciones agroalimentarias se obtienen a expensas de los trabajadores, los pequeños agricultores y las comunidades rurales, mediante prácticas extractivas como la expropiación, el despojo y la concentración de valor a lo largo de la cadena de suministro. Estas prácticas reproducen injusticias sociales, degradan los ecosistemas y socavan los derechos democráticos y la participación en el sistema alimentario.

Un *enfoque poscrecientista* desafía las narrativas centradas en el crecimiento impulsadas por el lobby agroalimentario y cuestiona su continua acumulación de capital. En su lugar, se pregunta cómo pueden reorganizarse los sistemas alimentarios en torno al cuidado, la justicia, la regeneración ecológica y el control democrático. Esta perspectiva pone de relieve la necesidad de que las comunidades locales y la ciudadanía recuperen el control sobre cómo cultivamos, distribuimos, consumimos y compostamos los alimentos. En todo el mundo, las prácticas agroecológicas sirven como marco orientador para la acción, aplicando conceptos ecológicos y principios de justicia social al estudio, diseño y gestión de los sistemas

alimentarios. La agroecología integra diversos sistemas de conocimiento y puede utilizarse como una estrategia transformadora para aprovechar el conocimiento específico del contexto de los campesinos y los pequeños productores.

La población urbana ya experimenta con una amplia gama de prácticas que contribuyen a sistemas alimentarios en clave de poscrecimiento. Entre ellas se incluyen los huertos y cocinas comunitarios, la reducción del desperdicio de alimentos, el compostaje urbano, los centros de alimentación locales, los supermercados cooperativos y los bancos de alimentos solidarios. Central a muchas de estas prácticas es la transformación del sistema alimentario desde abajo. Sin embargo, el apoyo de los gobiernos locales y las alianzas público-comunitarias suele ser decisivo para lograr un enfoque integrado de las transformaciones del sistema alimentario. Un número creciente de Consejos de Política Alimentaria (CPA) en ciudades de todo el mundo ofrece el potencial de tender un puente entre la ciudadanía y los gobiernos.⁶⁴

El CPA de Milán demuestra cómo la ciudadanía y las autoridades locales colaboran para debatir cómo funciona el sistema alimentario y las formas de mejorarlo. Desde 2015, el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) ha impulsado esfuerzos para democratizar los sistemas alimentarios urbanos, cuestionando la reducción de la alimentación a una mercancía de mercado. En su lugar, la alimentación se plantea como una infraestructura urbana estratégica, esencial para la cohesión social, la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia (MUFPP). Hasta ahora, 330 ciudades han firmado el MUFPP y se han comprometido a «desarrollar sistemas alimentarios sostenibles que sean inclusivos, resilientes, seguros y diversos».⁶⁵



Buenas prácticas

Transformando el sistema alimentario urbano en la ciudad de Lovaina

«Voeding Verbindt» (La Alimentación Conecta) es el lema bajo el cual la ciudad belga de Lovaina desarrolló una estrategia para lograr una alimentación saludable, local y sostenible de aquí a 2030⁶⁶. Inspirados en los planes integrados de política alimentaria de diversas ciudades de todo el mundo, distintos actores dentro y alrededor de Lovaina se unieron para codiseñar la estrategia alimentaria de la ciudad. Voeding Verbindt no solo pretende abordar un único aspecto de la cadena agroalimentaria, sino que integra fundamentalmente diversas herramientas y estrategias para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible. Lo especial de Voeding Verbindt es que está diseñado y aplicado mediante la participación y los esfuerzos colectivos de un conjunto diverso de actores de todas las dimensiones de la cadena agroalimentaria, incluidos ciudadanos, empresas y redes locales, científicos y el propio Ayuntamiento de Lovaina. El Ayuntamiento de Lovaina utiliza su propio suelo como palanca para alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia de política alimentaria. A través de varios proyectos, se asigna suelo público a pequeños productores que se comprometen con principios ecológicos y la producción alimentaria local. Al ofrecer contratos de concesión junto con alquileres sin coste de parcelas agrícolas, el Ayuntamiento de Lovaina garantiza que la tierra de cultivo no se convierta en un objeto especulativo y permanezca en propiedad

pública. Esto da “espacio” a la producción alimentaria sostenible y va de la mano de una mayor transparencia, actividades educativas y cadenas de suministro más cortas. En Lovaina, consumidores y productores se reconectan y se acercan entre sí. Un objetivo central de Voeding Verbindt es aumentar la accesibilidad de una alimentación saludable, local y de temporada para todos (FEAST).⁶⁷ La estrategia integrada de política alimentaria de Lovaina demuestra que la política alimentaria puede utilizarse como una estrategia urbana transversal en lugar de como un añadido sectorial.

El caso de Pluk!: cuidando las prácticas alimentarias locales en Ámsterdam

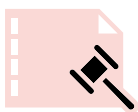
Cuando se puso en marcha en 2017 la iniciativa de agricultura sostenida por la comunidad (ASC) Pluk! Groenten van West («¡Cosecha! Verduras del Oeste»), alrededor de 200 familias de Ámsterdam comenzaron a cosechar sus propias verduras, hierbas y flores comestibles ecológicas cultivadas localmente.⁶⁸ Una ASC es una organización comunitaria de cultivadores y consumidores basada en un compromiso mutuo respecto a la planificación y presupuestación a largo plazo, precios justos para los agricultores y el suministro de alimentos locales y, con mayor frecuencia, ecológicos para sus miembros. En Pluk!, los miembros de la ASC conocen a los agricultores que cultivan los alimentos, participan en actividades de construcción de comunidad y educación, y a través de sus prácticas aumentan la diversidad genética y reducen las emisiones de CO₂. Una escala de precios variable facilita el acceso a los grupos socioeconómicamente marginados en los dos huertos diferentes situados al oeste de Ámsterdam. Esto convierte a la ASC en un ejemplo útil de cómo la solidaridad, el acceso y el abastecimiento local pueden combinarse en la práctica. Una creciente red de granjas de ASC en toda Europa refuerza las voces tanto de consumidores como de productores que reclaman un sistema alimentario más diverso y sostenible en la formulación de políticas locales y nacionales.⁶⁹



Conclusiones clave

1. *Los sistemas alimentarios industrializados y orientados al crecimiento concentran el poder en manos de un pequeño número de corporaciones agroalimentarias, impulsando las desigualdades sociales, la degradación ambiental y la dependencia a lo largo de toda la cadena alimentaria.*

2. *Sin embargo, los gobiernos locales y las comunidades resisten y transforman los sistemas alimentarios orientados al beneficio mediante alianzas público-comunitarias, iniciativas alimentarias locales y estrategias integradas, basándose en la agroecología, la soberanía alimentaria y el control democrático sobre la producción, distribución y consumo de alimentos.*



Recomendaciones de políticas

Reconectar la planificación territorial con las políticas agrícolas agroecológicas

- Los municipios deben asignar suelo de propiedad pública (sin coste de alquiler o mediante contratos de concesión) a agricultores locales bajo condiciones que exijan prácticas agroecológicas, como la salud del suelo, la biodiversidad, la equidad social y de género, y la cocreación de conocimiento.⁷⁰
- Emplear políticas de uso del suelo para contrarrestar la influencia de las grandes corporaciones agroalimentarias garantiza que la tierra cultivable cercana a la ciudad se utilice para proporcionar a la población urbana productos frescos, locales y de temporada. De este modo, los gobiernos locales pueden acortar las cadenas de suministro alimentario y reconectar las zonas y poblaciones urbanas y rurales.

Fomentar la contratación pública sostenible

- Los municipios pueden adoptar directrices de compra pública que aumenten la producción y el consumo de alimentos locales, socialmente inclusivos y de temporada, y que faciliten dietas saludables y respetuosas con el clima en comedores escolares, hospitales, oficinas gubernamentales e instalaciones municipales.⁷¹
- La contratación pública sostenible debe desarrollarse junto con las partes interesadas locales y vincularse a estrategias de política alimentaria más amplias.⁷²

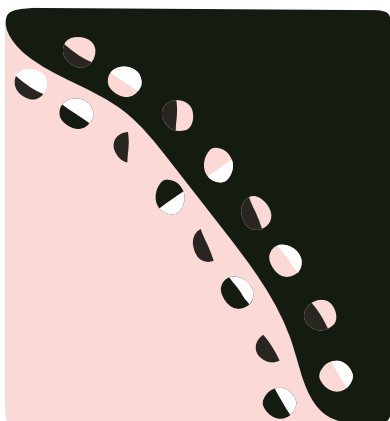
Reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro alimentario

- Reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro alimentario es una de las formas más eficaces en que las ciudades pueden mejorar la sostenibilidad de sus sistemas alimentarios. Los gobiernos locales pueden establecer regulaciones claras y accesibles sobre los residuos domésticos, las pérdidas minoristas, los excedentes de restauración y los sistemas de redistribución, combinando prevención, recuperación y compostaje para cerrar los ciclos de nutrientes y reducir las emisiones.
- La acción municipal resulta especialmente eficaz cuando la reducción de residuos se vincula a la educación, la redistribución y las prácticas de economía circular.

Apoyar el desarrollo de capacidades para la colaboración y las redes en torno a la alimentación

- Los gobiernos locales pueden facilitar la democratización de los sistemas alimentarios apoyando las redes locales en torno a las transformaciones alimentarias y construyendo alianzas público-comunitarias. Esto incluye la creación de consejos de política alimentaria, el apoyo a las cooperativas alimentarias, las redes de huertos comunitarios, las cocinas comunitarias, la promoción de la participación ciudadana y la aplicación de estrategias integradas de política alimentaria.
- Las alianzas público-comunitarias ayudan a conectar las iniciativas de abajo arriba con los procesos formales de política, y facilitan escalar los proyectos piloto exitosos sin perder la autonomía local. Una participación bien estructurada, funciones claras, una coordinación dedicada y una financiación fiable son esenciales para desarrollar y aplicar transformaciones en el sistema alimentario. En la práctica, las redes permiten a las ciudades convertir iniciativas aisladas en infraestructura compartida para un sistema alimentario más justo.

Movilidad



La movilidad urbana no trata solo de cómo se desplaza la gente por las ciudades, sino también de cómo se organiza el espacio urbano, la movilidad de quién se prioriza y qué modos de transporte se privilegian. En gran parte del Norte Global, los sistemas de movilidad se han configurado en torno a formas de transporte altamente individualizadas, intensivas en recursos y espacio, y basadas en gran medida en combustibles fósiles. Décadas de inversión (pública) en infraestructura centrada en el automóvil han reforzado una planificación y unas culturas urbanas orientadas al crecimiento, a pesar de la evidencia de que ampliar la

capacidad del transporte a menudo genera más costes sociales y ambientales que beneficios.

Los sistemas de movilidad urbana actuales contribuyen a la contaminación, el cambio climático, las muertes por accidentes de tráfico, el estrés y el deterioro de la salud pública, al tiempo que refuerzan las desigualdades estructurales.⁷³ En concreto, los grupos de menores ingresos se ven perjudicados por la gobernanza dominante de los sistemas de movilidad urbana. Las desigualdades socioeconómicas se cruzan con otras dimensiones, como el género, la raza, la edad y la capacidad funcional, y afectan a las personas en términos de acceso, seguridad y carga financiera. Los sistemas de transporte están diseñados en torno a las necesidades de los desplazamientos de hombres sin discapacidad y usuarios de automóviles privados. Los patrones de movilidad circular y pública, utilizados de forma desproporcionada por personas cuidadoras (mayoritariamente mujeres), se ven perjudicados dentro de los sistemas de movilidad actuales.⁷⁴

Un número creciente de ciudades está rediseñando los sistemas de movilidad en torno a las diversas necesidades de las personas y el bienestar de las comunidades y el planeta, en lugar de priorizar los automóviles, la expansión motorizada y los intereses corporativos.

Un *enfoque poscrecentista* de la movilidad urbana orienta la transición hacia sistemas de transporte justos, localizando la economía y promoviendo el bienestar tanto de los seres humanos como de otras especies. En concreto, esto implica abordar las desigualdades socioecológicas estructurales y determinar quién se beneficia y quién se ve perjudicado en los sistemas de movilidad de nuestras ciudades. Requiere ampliar la infraestructura para caminar, ir en bicicleta y el transporte público asequible, y reducir radicalmente los modos de transporte perjudiciales, como los jets privados y los vehículos utilitarios deportivos (SUV) sobredimensionados, que sirven a las élites urbanas y a la acumulación de riqueza. Un giro hacia prácticas y sistemas de transporte compartidos y comunitarios es clave para la gobernanza urbana más allá del crecimiento, y puede ser igualmente una herramienta para que la ciudadanía recupere la ciudad.

Las «Superilles» (supermanzanas) de Barcelona ofrecen una muestra de cómo la ampliación de las zonas exclusivamente peatonales no solo reduce las emisiones, la contaminación acústica y el efecto isla de calor, sino que también proporciona espacio para que los vecinos se reúnan y practiquen movilidad activa, amplía las zonas verdes y aumenta la cohesión social y el bienestar en la ciudad.⁷⁵ Las supermanzanas limitan el número de calles destinadas al tráfico rodado, redistribuyendo el espacio público entre vehículos y peatones.

Una *perspectiva poscrecentista* advierte a los gobiernos de que las políticas y la planificación poscrecentista deben situar en el centro las consideraciones de justicia social, y no propiciar (de forma involuntaria) procesos de gentrificación verde y la exclusión de grupos marginados y trabajadores esenciales.⁷⁶ Incluir las necesidades de las comunidades marginadas y redistribuir los costes y beneficios asociados a los sistemas de movilidad actuales y poscrecentistas es clave para avanzar hacia ciudades justas más allá del crecimiento.



La transición hacia la ciudad de 10 minutos en Utrecht

En la ciudad neerlandesa de Utrecht, el acceso a la alimentación, el cuidado, el trabajo y las actividades sociales y culturales se garantiza a la ciudadanía a través de un sistema de transporte compacto. Se priorizan caminar, ir en bicicleta y viajar en transporte público. La visión de la ciudad para 2040 busca reducir drásticamente los tiempos y las distancias de desplazamiento, transitando hacia una «ciudad de 10 minutos».⁷⁷ En la práctica, Utrecht incorpora esta ambición en una estrategia espacial integral. A través de ella, se examina y se reorganiza en consecuencia la distribución espacial de la ciudad, en beneficio de la salud y el bienestar de quienes viven y trabajan en Utrecht. El gobierno local demuestra que reducir la dependencia del automóvil mediante una amplia infraestructura ciclista y una red de transporte accesible y bien conectada libera drásticamente espacio y posibilidades. El espacio puede volverse público y utilizable para zonas verdes, encuentros, actividades culturales, ejercicio y juego. Al construir una ciudad inclusiva para todos y priorizar la habitabilidad, la salud pública y la resiliencia climática, la gobernanza de la movilidad de Utrecht es un pilar integral de su transformación urbana más amplia. Cabe destacar que el diseño y la aplicación de las políticas asociadas se caracterizan por una planificación a largo plazo y la participación de la ciudadanía, empresarios, organizaciones y otras autoridades públicas. Al enmarcar la movilidad como un bien común, Utrecht demuestra cómo las ciudades pueden avanzar hacia futuros de movilidad justos más allá del crecimiento, tomando decisiones políticas diferentes.

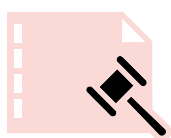
Experimentos con transporte público gratuito en Tallin

El sistema de transporte público de Tallin es ampliamente reconocido como un ejemplo destacado de gobernanza urbana poscrecientista, mediante la implementación de transporte público gratuito para los residentes registrados.⁷⁸ Introducida en 2013, la política se diseñó no solo para mejorar la movilidad, sino también para avanzar en la inclusión social, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental. Al reducir las barreras financieras a la movilidad, Tallin replanteó el transporte urbano como un servicio público que apoya el bienestar colectivo, en lugar de una mercancía basada en el mercado. La política ha ido acompañada de inversiones en infraestructura de transporte público y una planificación urbana integrada, lo que ilustra cómo la gobernanza de la movilidad puede priorizar el acceso equitativo, la reducción de la dependencia del automóvil y la calidad de vida en el diseño y la aplicación de los sistemas de movilidad.⁷⁹



Conclusiones clave

- 1. Los sistemas de movilidad urbana actuales tienden a reforzar los impactos ecológicos negativos, el elevado flujo de materiales y las desigualdades sociales, al privilegiar los vehículos privados y pasar por alto las necesidades de movilidad de los grupos marginados.*
- 2. Mediante la planificación integrada, el gasto público y la participación ciudadana, los municipios comienzan a transformar los sistemas de movilidad orientados al crecimiento y a mejorar la accesibilidad a los servicios esenciales, reducir la dependencia del automóvil, recuperar el espacio público y redistribuir de forma justa los costes y beneficios del transporte urbano.*



Recomendaciones de políticas

Regular y eliminar progresivamente los modos de transporte de altas emisiones, garantizando al mismo tiempo una transición socialmente justa

- Los instrumentos clave que los gobiernos locales pueden emplear para regular y eliminar progresivamente los modos de transporte privados y de altas emisiones incluyen la limitación del acceso al espacio para vehículos perjudiciales. Hacer poco atractivo el uso del automóvil puede lograrse mediante zonas de bajas emisiones y libres de coches, la gestión del espacio de aparcamiento, las tarifas por congestión y los límites de velocidad. Las subvenciones gubernamentales reducidas para plazas de aparcamiento y el aumento de las tarifas pueden reasignarse para financiar sistemas de transporte público de mayor calidad o gratuitos.

- Al mismo tiempo, los gobiernos pueden detener las inversiones en proyectos de infraestructura ecológicamente perjudiciales, como aeropuertos urbanos y la ampliación de las redes viarias. En su lugar, debe priorizarse la infraestructura verde.
- Las consideraciones de justicia social deben ocupar un lugar central en el diseño y la aplicación de estas regulaciones, así como de las intervenciones verdes. Se recomienda a las autoridades que realicen evaluaciones del riesgo de desplazamiento para evitar el refuerzo de las desigualdades socioeconómicas y los efectos secundarios de las zonas de bajas emisiones o la gentrificación (verde).

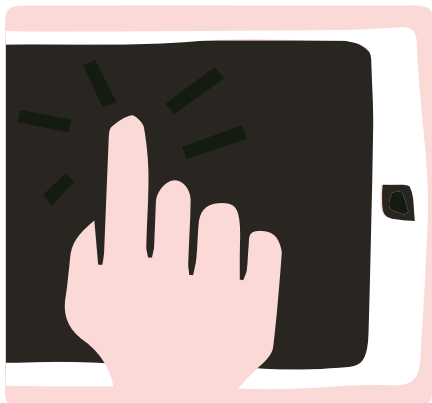
Ampliar la infraestructura inclusiva para caminar, ir en bicicleta y el transporte público

- Regular el espacio incluye de forma esencial la ampliación de infraestructura habitante e inclusiva en la planificación urbana. Los gobiernos locales pueden tomar medidas para limitar las distancias y los tiempos de desplazamiento, beneficiando a la economía local, la salud pública y la disponibilidad de espacio, mediante el fortalecimiento de un sistema de transporte compacto basado en la movilidad activa y el transporte público asequible o gratuito.
- Los procesos de toma de decisiones municipales deben incluir a diversos actores, con las necesidades de los grupos marginados informando las políticas y la gobernanza de la movilidad. El diseño de carriles bici y sendas peatonales, redes de transporte público y la reconfiguración espacial de las zonas urbanas pueden llevar los sistemas de movilidad más allá de los paradigmas de transporte orientados al crecimiento, hacia transformaciones sociales y ecológicas. Las evaluaciones previas del cambio de comportamiento y de las consecuencias sociales y ecológicas (adversas) deben incluirse en cualquier planificación y toma de decisiones relativa a los sistemas de movilidad dentro y fuera de la ciudad.

Apoyar iniciativas de movilidad compartida

- Apoyar iniciativas de movilidad compartida, como el uso compartido de coches y bicicletas, ofrece una estrategia clave para que los municipios transformen la movilidad urbana en un bien gestionado de forma común.
- Los instrumentos políticos para los gobiernos locales incluyen la provisión de plazas de aparcamiento para vehículos (eléctricos) compartidos, la subvención de membresías gratuitas para la ciudadanía de bajos ingresos, y la provisión de bicicletas compartidas gratuitas en zonas urbanas y periurbanas.

Tecnologías digitales



Transformar la economía implica lidiar con el ámbito digital, que ahora proporciona la infraestructura y los intermediarios de la vida económica. Esto conlleva oportunidades en comunicación, intercambio de información y productividad, junto con retos serios: la vigilancia, la mercantilización de la vida cotidiana y el creciente desequilibrio de poder económico y social. La huella ecológica es considerable: los datos en realidad no están en una «nube», sino en servidores que consumen enormes cantidades de energía, agua y minerales críticos, y el auge de la IA y la computación

en la nube ha aumentado drásticamente la demanda de tierras raras, litio, cobalto y otros minerales concentrados en regiones geopolíticamente sensibles, con los correspondientes costes ambientales y sociales.⁸⁰

Dado que el ámbito digital constituye ahora una infraestructura económica central, quién lo controla y posee importa, igual que sucede con los puentes, las carreteras, los oleoductos, la educación o la vivienda: todos ellos bienes públicos que deberían gobernarse en interés público conforme a principios democráticos. La infraestructura digital, en gran medida, no lo es. Un puñado de grandes empresas tecnológicas controla ahora la tecnología que sustenta sectores críticos —las comunicaciones, la sanidad, la educación, los medios de comunicación, incluso el gobierno—, poniendo bajo una presión crítica la autonomía digital y, por tanto, la autodeterminación. Esto conlleva riesgos para la resiliencia económica y democrática, cada vez más visibles ante el aumento de las ciberamenazas y las tensiones geopolíticas.

Las ciudades han experimentado la misma transformación. Desde las compras hasta las citas, desde la movilidad hasta la sanidad, la digitalización toca todos los ámbitos de la vida urbana, casi siempre impulsada por grandes empresas tecnológicas, con la ciudadanía posicionada como consumidora en lugar de participante. La economía de plataformas abarca el reparto (Uber Eats, Thuisbezorgd), el comercio electrónico (Amazon), los servicios de transporte con conductor (Uber, Bolt), la educación (Google, Microsoft) y la IA (OpenAI, Anthropic), entre otros.⁸¹

Los modelos de negocio de estas plataformas se basan en extraer una gran parte del valor para la propia plataforma, dejando una parte menor para usuarios, trabajadores, barrios y ciudades. El modelo organizado en plataformas reclasifica a las personas que realizan trabajo a tiempo completo como “trabajadores por encargo”, despojándolos de las protecciones que ese estatus les garantizaría de otro modo, mientras que la opaca gestión algorítmica —que fija la remuneración, asigna tareas e impone sanciones en gran medida fuera de la vista— socava aún más los derechos laborales y deja a gobiernos y sindicatos mal equipados para protegerlos.⁸² La transición digital reconfigura así no solo los derechos laborales y la autodeterminación, sino también los barrios, las comunidades y las economías locales en general.

Un enfoque poscrecentista apunta hacia la adopción de entornos digitales democráticos contruidos sobre la transparencia, la elección y la agencia de la ciudadanía y las comunidades, todos ellos clave para revertir las dinámicas descritas anteriormente. La elección de la tecnología importa: proporciona la infraestructura sobre la que funcionan nuestras economías. Es precisamente porque un puñado de grandes plataformas controlan actualmente esa infraestructura que el valor se extrae en lugar de compartirse, y la ciudadanía termina como consumidora en lugar de participante. Las herramientas e infraestructuras digitales que utilizamos moldean nuestras prácticas, y su diseño, propiedad y gobernanza apoyan o socavan la actividad económica democrática y orientada a la suficiencia. La tecnología puede organizarse para apoyar dichas prácticas, pero esto requiere un diseño y una gobernanza deliberados de nuestras herramientas y entornos digitales. Existen herramientas y entornos que permiten la autodeterminación mediante la práctica democrática, y el valor creado permanece dentro de las comunidades, en lugar de fluir hacia accionistas distantes.⁸³ Podemos referirnos a esto como «tecnología democrática».

Esto requiere infraestructuras digitales abiertas, interoperables y descentralizadas, que funcionen mediante la práctica democrática y la gobernanza colectiva. En la práctica, esto se materializa como bienes comunes digitales —proyectos de conocimiento y tecnología gestionados colectivamente, como Wikipedia y Linux—, o como cooperativas de plataforma, donde la propiedad y la toma de decisiones recaen en los trabajadores y miembros en lugar de en los accionistas, o como protocolos abiertos descentralizados, que permiten a proveedores independientes interoperar sobre una infraestructura compartida y no propietaria, en lugar de quedar atrapados en una única plataforma corporativa. Preferiblemente, las comunidades cogen las tecnologías de las que dependen, ya sea mediante la producción basada en los comunes, la propiedad cooperativa o los estándares abiertos. Para los municipios, hay un papel importante que desempeñar aquí: concretamente, apoyar e impulsar el uso y desarrollo de este tipo de herramientas e infraestructuras digitales democráticas. Esto incluye la adopción de normas de contratación ajustadas y un apoyo específico a los bienes comunes digitales, en lugar de profundizar la dependencia de un pequeño número de empresas tecnológicas dominantes.⁸⁴

Bienes comunes digitales

La mayoría de nosotros utilizamos Wikipedia, una enciclopedia en línea mantenida y renovada por una gran comunidad, que se rige por un conjunto de reglas para tener el mejor contenido. Este es un ejemplo destacado de un bien común digital, que forma un componente esencial de la infraestructura digital de la economía más allá del crecimiento.

Los bienes comunes digitales ilustran cómo funciona con éxito la tecnología democrática en la práctica. Como enfoques resilientes y liderados por la comunidad hacia la tecnología y la gobernanza de datos, los bienes comunes digitales abarcan una variedad de modelos y formas organizativas en los que el conocimiento y la tecnología se gestionan o desarrollan colectivamente. Se caracterizan por la producción colaborativa y una comunidad activa, la propiedad y gobernanza compartidas, y una práctica de cuidado democrática.

(...)

Ya existen muchos proyectos exitosos que forman parte de los bienes comunes digitales:

- Proyectos de código abierto ampliamente utilizados, como el sistema operativo Linux y el servidor web Apache.
- Wikipedia, Open Food Facts y Open Street Maps son ejemplos de bienes comunes de conocimiento digital abiertos.
- La aplicación generalizada de licencias Creative Commons garantiza que la infraestructura digital y el conocimiento compartidos sirvan al interés público.
- Ejemplos como Nextcloud, Framasoft, Mastodon, PeerTube, Drivers Cooperative y cooperativas de datos como Posmo demuestran que estos modelos pueden desplegarse en ámbitos diversos, desde los datos y la nube hasta las plataformas y la movilidad.



Buenas prácticas

Movilidad cooperativa: una plataforma colectiva de coche compartido en Cataluña.

Las cooperativas de plataforma, como [Som Mobilitat](#), muestran cómo las decisiones deliberadas en el diseño tecnológico, la propiedad y la gestión de datos pueden ayudar a construir una economía cooperativa y de posrecimiento en las ciudades. Som Mobilitat es una cooperativa tecnológica en Cataluña que combina la gobernanza democrática con servicios de movilidad prácticos, demostrando que la economía comunitaria y la innovación digital no están en tensión. La mayoría de sus vehículos son de propiedad colectiva y están cofinanciados por los socios o mediante micromecenazgo, y las decisiones clave se toman democráticamente entre los socios en lugar de estar impulsadas por el beneficio. La cooperativa también comparte su plataforma tecnológica con otras cooperativas de movilidad en toda Europa, como Partago en Bélgica, mostrando cómo la propiedad cooperativa puede extenderse a la propia infraestructura digital, y no solo a los activos físicos, y cómo la gestión de datos y tecnología puede organizarse de forma colectiva en lugar de concentrarse en manos de una única plataforma corporativa.

La infraestructura digital como bien público: protocolos abiertos descentralizados

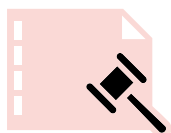
Los protocolos abiertos ofrecen una forma de construir infraestructura digital pública e interoperable, más allá del control de las plataformas corporativas. El [Beckn Protocol](#), utilizado en India, es un ejemplo destacado: un estándar de código abierto que permite a diferentes

proveedores de movilidad y servicios interoperar, de forma similar a como el correo electrónico permite que Gmail y Outlook se comuniquen libremente, a diferencia de plataformas cerradas como Facebook. [Namma Yatri](#), una aplicación de transporte con conductor construida sobre Beckn, muestra cómo se ve esto en la práctica: en lugar de cobrar la comisión típica de Uber, del 15 al 25 %, funciona con una modesta suscripción fija, lo que permite a los conductores quedarse con la totalidad de la tarifa. Dado que el propio protocolo es abierto, ninguna empresa controla en solitario la infraestructura, y conductores, pasajeros y otros proveedores pueden conectarse todos a la misma red. Esto ilustra cómo los protocolos abiertos pueden eliminar intermediarios extractivos y convertir la infraestructura digital en un bien compartido y semipúblico, ofreciendo a las ciudades una práctica concreta para organizar la movilidad y otros servicios más allá de la lógica del crecimiento y la extracción de las plataformas.



Conclusiones clave

- 1. La tecnología no es un intermediario neutral.*
- 2. La tecnología digital deberá diseñarse y gobernarse conforme a principios democráticos y objetivos sociales, para evitar prácticas extractivas y posibilitar el bienestar.*
- 3. Las ciudades tienen un papel clave que desempeñar para lograrlo.*



Recomendaciones de políticas⁸⁵

Explorar ajustes en la política de contratación y licitación para la tecnología democrática

- Para impulsar y facilitar el uso de la tecnología democrática, será necesario ajustar los requisitos de la política de contratación y las normas de licitación actuales. Las licitaciones pueden hacerse más pequeñas, por ejemplo, pero esto también concierne a los criterios de rendición de cuentas y presentación de informes, como los valores en función de los cuales se orienta y mide el rendimiento.

Establecer servicios y centros para la adopción y el desarrollo de tecnología democrática

- Establecer un proveedor de servicios de bienes comunes digitales para apoyar y facilitar la adopción de tecnología democrática por parte de organizaciones y ciudadanía. Y para hacer la transición hacia

espacios digitales seguros y plataformas amigables, alejándose de las plataformas de vigilancia y extracción.

- Cooperación público-cívica en un centro de tecnología democrática: habilitar un centro de conocimiento e incubadora que facilite programas de aceleración, espacios de encuentro e intercambio. Con ello, un municipio puede contribuir a un ecosistema de apoyo para iniciativas como Som Mobilitat.

Infraestructuras básicas compartidas

- Infraestructura digital pública: los municipios pueden implementar y apoyar provisiones digitales fundamentales, como redes, protocolos y plataformas, que puedan ser utilizadas por múltiples partes (al igual que las carreteras o las redes eléctricas en el mundo físico).

Conclusión

Las crisis analizadas en esta guía — la pobreza energética, la vivienda inasequible, los sistemas alimentarios industrializados, la movilidad dependiente del automóvil y la infraestructura digital controlada de forma centralizada — no son cinco problemas separados. Son cinco expresiones de la misma lógica subyacente: una economía organizada en torno al crecimiento y la acumulación de capital, en lugar de en torno al cuidado y la suficiencia. Abordarlos uno a uno, mediante soluciones técnicas aisladas, no será suficiente. Lo que muestran las prácticas y políticas recogidas aquí es que ya se está construyendo una lógica diferente, ciudad a ciudad, a menudo empezando a pequeña escala: una cooperativa que toma el control de una red eléctrica, un sindicato de inquilinos que gana un referéndum, un consejo de política alimentaria que reconecta una ciudad con su tierra de cultivo, un barrio que recupera sus calles, una comunidad que elige protocolos abiertos en lugar de plataformas corporativas centralizadas.

Lo que comparten estos ejemplos no es un único modelo, sino un cambio común en quién ostenta el poder y la propiedad sobre los sistemas que satisfacen las necesidades básicas. Ya se trate de energía, vivienda, alimentación, movilidad o datos, se repiten las mismas tres palancas: **la desmercantilización** (sacar los bienes esenciales de los mercados especulativos y tratarlos como bienes comunes o públicos), **la democratización** (dar a la ciudadanía una influencia real y estructurada sobre las decisiones que configuran sus barrios y su vida cotidiana, no solo una consulta después de los hechos) y **la redistribución** (de los costes, los beneficios, la propiedad y el poder de decisión, de modo que la transición no reproduzca ni profundice las desigualdades existentes).

Nada de esto ocurre por defecto. Cada caso recogido en esta guía, desde los rebeldes de la energía de Schönaú hasta el referéndum de socialización de la vivienda en Berlín, pasando por las asambleas ciudadanas de Grenoble, requirió decisiones institucionales deliberadas: nuevas estructuras de propiedad, nuevas normas de contratación, nuevos órganos democráticos, un compromiso político sostenido y, a menudo, años de organización. Las ciudades que quieran ir más allá del crecimiento tendrán que tomar decisiones similares de forma deliberada y repetida, en todos los ámbitos, en lugar de tratar las prácticas poscrecientistas como proyectos piloto aislados.

Esto también implica enfrentar tensiones reales. La rehabilitación puede desplazar a los inquilinos a quienes pretende ayudar si no existen protecciones de alquiler. Las supermanzanas y las zonas de bajas emisiones pueden impulsar la gentrificación verde si la equidad no se incorpora desde el principio. Los procesos deliberativos pueden volverse simbólicos en lugar de vinculantes si no cuentan con un poder de decisión real y un seguimiento efectivo. Ninguna de las recomendaciones políticas de esta guía garantiza automáticamente la justicia; su éxito depende de que se

apliquen junto con las comunidades más afectadas, y con una atención explícita a quién podría quedar excluido.

El camino de las ciudades más allá del crecimiento es, por tanto, un proceso continuo y deliberadamente democrático de reorganizar cómo las ciudades satisfacen las necesidades básicas. Las preguntas críticas planteadas al inicio de esta guía —quién se beneficia de la política actual, qué necesita transformarse, qué actores deben reunirse— no son ejercicios de diagnóstico puntuales; son preguntas a las que las ciudades tendrán que volver una y otra vez a medida que cambien las circunstancias, las coaliciones y las limitaciones. Las prácticas recogidas en esta guía no se ofrecen como un modelo a seguir, sino como evidencia de que ya es posible un tipo diferente de ciudad, una que mide el éxito por el bienestar y no por el flujo de materiales. Sus componentes se están construyendo pieza a pieza, en ciudades de hoy. En efecto, podemos organizarnos y satisfacer nuestras necesidades de otra manera, reconociendo la finitud de los recursos materiales y aceptando que formamos parte de los sistemas ecológicos de este planeta, y no estamos separados de ellos.

Endnotes

- 1 Jefim Vogel and Jason Hickel, 'Is Green Growth Happening? An Empirical Analysis of Achieved versus Paris-Compliant CO₂-GDP Decoupling in High-Income Countries'. *The Lancet Planetary Health* 7, no. 9 (2023): e759–e769, [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(23\)00174-2](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00174-2).
- 2 Planetary Health Check, Planetary Boundaries Science Lab, PIK, (2025), <https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/seven-of-nine-planetary-boundaries-now-breached-2013-ocean-acidification-joins-the-danger-zone>
- 3 Parrique et al., *Decoupling Debunked*, European Environmental Bureau, Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability (2019), <https://eeb.org/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf>
- 4 Müller et al., *The Raw Materials Rush*, How the European Union is using trade agreements to secure supply of critical raw materials for its green transition. Transnational Institute (2024), <https://www.tni.org/en/publication/the-raw-materials-rush>.
- 5 Bettache K, *The crisis we are not naming: The psychology of capitalism*. *British Journal of Social Psychology*. 65 no 1 (2026). <https://doi.org/10.1111/bjso.70044>
- 6 IPES Food. 'Who's Tipping the Scales? The Growing Influence of Corporations on the Governance of Food Systems, and How to Counter It'. 2023. <https://ipes-food.org/report/whos-tipping-the-scales/>.
- 7 Konstantin F. Pilz, Yusuf Mahmood, and Lennart Heim, *AI's Power Requirements Under Exponential Growth: Extrapolating AI Data Center Power Demand and Assessing Its Potential Impact on U.S. Competitiveness* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2025). https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3572-1.html
- 8 Tronto Joan C., *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice* (New York University Press, 2013).
- 9 Jackson Tim, *The Care Economy*. Polity Press, 2025.
- 10 Daly Herman E., *From Uneconomic Growth to a Steady-State Economy*, *Advances in Ecological Economics*. Edward Elgar Publishing, 2014.
- 11 Wilkinson Richard and Pickett Kate, *The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity, and Improve Everyone's Wellbeing*. Penguin Books, 2018
- 12 De Schutter Olivier, *The Roadmap for Eradicating Poverty Beyond Growth* (Geneva: United Nations Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, 2026) <https://www.neep-poverty.org/wp-content/uploads/2026/06/The-Roadmap-for-Eradicating-Poverty-Beyond-Growth.pdf>
- 13 <https://www.thesufficiencylab.org/blog/sufficiency-where-philosophy-meets-science/>
- 14 De Schutter Olivier, *The Roadmap for Eradicating Poverty Beyond Growth* (Geneva: United Nations Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, 2026) <https://www.neep-poverty.org/wp-content/uploads/2026/06/The-Roadmap-for-Eradicating-Poverty-Beyond-Growth.pdf>
- 15 Kubiszewski Ida, Costanza Robert, Eastoe Joseph, Lu Tianchi, Mulder Kenneth, Patteson Hernandez Grover, Benczúr Péter, and Dixon-Declève Sandrine, "Building Consensus on Societal Wellbeing: A Semantic Synthesis of Indicators to Move beyond GDP," *Ecological Indicators* 178 (2025): 114076.
- 16 <https://www.oecd.org/en/data/tools/well-being-data-monitor/better-life-index.html>

- 17 El pensamiento de los bienes comunes considera a las personas como talentosas y bien intencionadas, como parte de una comunidad, de un lugar y de una historia compartida. Las personas son ciudadanos, vecinos y colegas, no meramente consumidores en un mercado o «clientes» en un Estado de bienestar. Pero, más que una perspectiva o una teoría, los bienes comunes son una práctica. Por eso hablamos a menudo del «commoning» como una actividad. Las personas se reúnen en colectivos ciudadanos, cooperativas o grupos vecinales. Estos fortalecen el tejido social; el commoning se lleva a cabo colectivamente, pero a su vez también produce una mayor colectividad. Véase también David Bollier, *Think Like a Commoner: A Short Introduction to the Life of the Commons*, 2nd ed. Gabriola Island, BC: New Society Publishers, 2025.
- 18 Pappa, Androniki. “Public-Civic Partnership.” RE-DWELL Vocabulary. Created November 8, 2023. Updated October 23, 2024. <https://www.re-dwell.eu/concept-definition/56>.
- 19 Buurtrechten, Amsterdam. Accessed July 2026. <https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedoen/democratisering/buurtrechten>
- 20 Heron Kai, Milburn Keir, and Russell Bertie, *Radical Abundance: How to Win a Green Democratic Future*, Pluto Press, 2025.
- 21 Kishimoto Satoko, Steinfort Lavinia, and Petitjean Olivier, eds., *The Future Is Public: Towards Democratic Ownership of Public Services* (Amsterdam: Transnational Institute, 2020)
- 22 Sarah McKinley and Neil McInroy, “Action Guide for Advancing Community Wealth Building in the United States” (The Democracy Collaborative, 2023), <https://democracycollaborative.org/publications/community-wealth-building-action-guide>
- 23 CLES, Community Wealth Building, 2026. <https://cles.org.uk/expertise/community-wealth-building/https://cles.org.uk/expertise/community-wealth-building/>
- 24 James MacDonald-Nelson, Claudia Chwalisz, Ieva Česnulaitytė, and Lucy Reid, *Six Ways to Democratise City Planning: Enabling Thriving and Healthy Cities* (DemocracyNext, 2024), <https://www.demnext.org/uploads/Six-ways-to-democratise-city-planning-Enabling-thriving-and-healthy-cities.pdf>.
- 25 Claudia Chwalisz, *Eight Ways to Institutionalise Deliberative Democracy*, OECD Public Governance Policy Papers, No. 12 (Paris: OECD Publishing, 2021), <https://doi.org/10.1787/4fcf1da5-en>.
- 26 IEA. ‘Greenhouse Gas Emissions from Energy Data Explorer’. 2025. Accessed July 2026. <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emissions-from-energy-data-explorer>.
- 27 Bell, Shannon Elizabeth, Cara Daggett, and Christine Labuski. ‘Toward Feminist Energy Systems: Why Adding Women and Solar Panels Is Not Enough’. *Energy Research & Social Science* 68 (2020): <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101557>. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101557>.
- 28 Mateer, Jennifer, Simon Springer, Martin Locret-Collet, and Maleea Acker, eds. *Energies beyond the State: Anarchist Political Ecology and the Liberation of Nature*. Rowman & Littlefield, 2022.
- 29 WHO. ‘Tracking SDG7 Report: The Energy Progress Report’. 2025. <https://www.who.int/publications/m/item/2025-tracking-sdg7-report>.
- 30 Widuto, Agnieszka. *Energy Poverty in the EU*. EPRS European Parliamentary Research Service, 2023. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733583/EPRS_BRI\(2022\)733583_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733583/EPRS_BRI(2022)733583_EN.pdf).
- 31 Bouzarovski, Stefan, Sergio Tirado Herrero, Saska Petrova, Jan Frankowski, Roman Matoušek, and Tomas Maltby. ‘Multiple Transformations: Theorizing Energy Vulnerability as a Socio-Spatial Phenomenon’. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography* 99, no. 1 (2017): 20–41. <https://doi.org/10.1080/04353684.2016.1276733>.

- 32 Großmann, Katrin, and Antje Kahlheber. 'Energy Poverty in an Intersectional Perspective: On Multiple Deprivation, Discriminatory Systems, and the Effects of Policies'. In *Energy Poverty and Vulnerability*. Routledge, 2017.
- 33 Sahakian, Marlyne, Tina Fawcett, and Sarah Darby. 'Energy Sufficiency in Buildings and Cities: Current Research, Future Directions'. *Buildings and Cities* 5, no. 1 (2024): 692–703. <https://doi.org/10.5334/bc.519>.
- 34 Paz, Janine. 'Energy Contracts Renegotiation between Honduras and Its Generators'. Consortium Legal, 2023. <https://consortiumlegal.com/en/2023/01/11/energy-contracts-renegotiation-between-honduras-and-its-generators/>.
- 35 Kishimoto, Satoko, and Olivier Petitjean, eds. *Reclaiming Public Services: How Cities and Citizens Are Turning Back Privatisation*. Transnational Institute (TNI), 2017. <https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services>.
- 36 we own it. 'Bring Energy Into Public Ownership'. Accessed July 2026. <https://weownit.org.uk/public-ownership/energy>.
- 37 Local Government Association. 'Percentage of Households in Fuel Poverty (LIHC) in Manchester'. 2018. Accessed July 2026. https://lginform.local.gov.uk/reports/lgastandard?mod-area=E08000003&mod-group=AllSingleTierAndCountyLaInCountry_England&mod-metric=2131&mod-type=namedComparisonGroup.
- 38 Manchester City Council. 'Funding and support for energy improvements'. Accessed July 2026. <https://www.manchester.gov.uk/homes-and-property/energy-efficiency/get-support-for-your-energy-improvements>.
- 39 Wise, Freya, Aaron Gillich, and Pippa Palmer. 'Retrofit Information Challenges and Potential Solutions: Perspectives of Households, Retrofit Professionals and Local Policy Makers in the United Kingdom'. *Energy Research & Social Science* 119 (2025): 103866. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103866>.
- 40 EWS Elektizitätswerke Schönau. Accessed July 2026. <https://www.ews-schoenau.de/> Véase también el municipio de Wolfhagen (Alemania) como un caso de municipalización liderada por una autoridad pública:
- 41 See also the municipality of Wolfhagen as a public authority-led municipalisation: <https://publicfutures.org/>.
- 42 REScoop. Accessed July 2026. <https://www.rescoop.eu/>
- 43 Barlow, Nathan, Livia Regen, Noémie Cadiou, et al., eds. *Degrowth and Strategy: How to Bring about Social-Ecological Transformation*. 1st edn. MayFly Books, 2022.
- 44 Holm, Andrej, Georgia Alexandri, and Matthias Bernt, eds. *Housing Policy under the Conditions of Financialisation*. Sciences Po Urban School, 2023. <https://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/sites/sciencespo.fr/ecole-urbaine/files/Rapporthousinghopofn.pdf>.
- 45 Council of the EU and European Council. 'The EU's Housing Crisis'. Accessed July 14, 2026. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/housing-crisis/>.
- 46 Poggio, Teresio, and Christine Whitehead. 'Social Housing in Europe: Legacies, New Trends and the Crisis'. *Critical Housing Analysis* 4, no. 1 (2017): 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13060/23362839.2017.3.1.319>.
- 47 Waldron, Richard. 'Generation Rent and Housing Precarity in "Post Crisis" Ireland'. *Housing Studies* 38, no. 2 (2023): 181–205. <https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1879998>.

- 48 Barlow, Nathan, Livia Regen, Noémie Cadiou, et al., eds. *Degrowth and Strategy: How to Bring about Social-Ecological Transformation*.
- 49 European Environment Agency. 'From Data to Decisions: Material Footprints in European Policy Making'. 2024. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/material-footprints-in-european-policy-making>.
- 50 Barlow, Nathan, Livia Regen, Noémie Cadiou, et al., eds. *Degrowth and Strategy: How to Bring about Social-Ecological Transformation*.
- 51 Savini, Federico, António Ferreira, and Kim von Schönfeld. *Post-Growth Planning: Cities beyond the Market Economy*. Routledge, 2022.
- 52 For more examples of best practices around the housing-energy nexus, see <https://prefigure.eu/prototypes-of-change>.
- 53 Cooperative Housing International. 'Austrian Federation of Limited-Profit Housing Associations (GBV)'. Accessed July 14, 2026. <https://www.housinginternational.coop/members/osterreichischer-verband-gemeinnutziger-bauvereinigungen-revisionsverband-austrian-federation/?cn-reloaded=1>
- 54 City of Vienna. 'Legal Framework Conditions: Limited-Profit Housing Act'. <https://socialhousing.wien/policy/legal-framework-conditions>.
- 55 Federal Ministry Labour, Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection Republic of Austria. 'WOHNSCHIRM: For Safe Living Conditions'. Accessed July 2026. <https://wohnschirm.at/en/>.
- 57 'CATU: Community Action Tenants Union Ireland'. Accessed July 2026. <https://catuireland.org/>.
- 57 Deutsche Wohnen & Co Enteignen. Accessed July 2026. <https://dwenteignen.de/en>.
- 58 Feola, Giuseppe. 'Postgrowth Food Systems: Critique, Visions, Pathways'. *Degrowth Journal* Volume 3 (2025). <https://www.degrowthjournal.org/publications/2025-01-27-postgrowth-food-systems-critique-visions-pathways/>.
- 59 Ambikapathi, Ramya, Kate R. Schneider, Benjamin Davis, Mario Herrero, Paul Winters, and Jessica C. Fanzo. 'Global Food Systems Transitions Have Enabled Affordable Diets but Had Less Favourable Outcomes for Nutrition, Environmental Health, Inclusion and Equity'. *Nature Food* 3, no. 9 (2022): 764–79. <https://doi.org/10.1038/s43016-022-00588-7>.
- 60 IPES Food. 'Who's Tipping the Scales? The Growing Influence of Corporations on the Governance of Food Systems, and How to Counter It'. 2023. <https://ipes-food.org/report/whos-tipping-the-scales/>.
- 61 Shiva, Vandana. *Who Really Feeds the World?: The Failures of Agribusiness and the Promise of Agroecology*. Zed Books, 2016.
- 62 Campbell, Bruce M., Douglas J. Beare, Elena M. Bennett, et al. *Agriculture Production as a Major Driver of the Earth System Exceeding Planetary Boundaries*. (2017). <https://doi.org/10.5751/es-09595-220408>.
- 63 see note 63
- 64 Andreola, Mattia, Francesca Forno, and Michela Giovannini. 'Tracing Democratic Innovations: A Longitudinal Perspective on a Food Policy Council'. *Environment and Planning C: Politics and Space* 44, no. 2 (2026): 213–35. <https://doi.org/10.1177/23996544251369249>.

- 65 MUFPP. 'Milan Urban Food Policy Pact'. Accessed July 2026. <https://www.milanurbanfood-policy pact.org/>.
- 66 Voeding Verbindt: Een Voedselstrategie Voor Leuven. Leuven 2030, n.d. https://assets.rikolto.org/paragraph/attachments/leuvense-voedselstrategie_voeding-verbindt.pdf.
- 67 Leuven 2030. 'FEAST: Gezonde En Duurzame Voeding Voor Kwetsbare Doelgroepen'. <https://www.leuven2030.be/doorbraakproject/feast-gezonde-en-duurzame-voeding-voor-kwetsbare-doel-groepen>.
- 68 'Pluk! Groenten van West Twee Biologische Zelfoogsttuinen in Amsterdam Nieuw-West'. Accessed July 2026. <https://plukcsa.nl/>.
- 69 See for example, the German (<https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/>) and Dutch (<https://www.csanetwerk.nl/>) network.
- 70 Agroecology Europe. 'Principles of Agroecology'. Accessed July 2026. <https://www.agroecology-europe.org/our-approach/principles/>.
- 71 Véase, por ejemplo:: Barcelona <https://www.barcelona.cat/alimentaciosostenible/en/programs-and-initiatives/public-food-procurement-guidelines> <https://www.barcelona.cat/alimentaciosostenible/en/programs-and-initiatives/public-food-procurement-guidelines> and Milan <https://www.milanurbanfoodpolicy pact.org/resources/city-school-meals-case-study milan/>
- 72 C40 Cities. 'How Cities Can Use Procurement to Shift towards Healthy, Sustainable Diets', 2023. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-cities-can-use-procurement-to-shift-to-wards-sustainable-food-consumption?language=en_US.
- 73 Barlow, Nathan, Livia Regen, Noémie Cadiou, et al., eds. Degrowth and Strategy: How to Bring about Social-Ecological Transformation.
- 74 European Environmental Bureau and WECF. Why the European Green Deal Needs Ecofeminism. 2021. https://eeb.org/en_gb/library/why-the-european-green-deal-needs-ecofeminism/.
- 75 Nieuwenhuijsen, Mark, Audrey de Nazelle, Marta Cirach Pradas, et al. 'The Superblock Model: A Review of an Innovative Urban Model for Sustainability, Liveability, Health and Well-Being'. Environmental Research (2024): <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118550>. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118550>.
- 76 Oscilowicz, Emilia, Lisa Hannuschke, Isabelle García-Lamarca, Amalia Calderón-Argelich, and James J. T. Connolly. Climate Justice and the Built Environment in Europe. Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BC-NUEJ), 2026. <https://www.bcnuej.org/wp-content/uploads/2026/04/CUBE-report-BCNUEJ-corregido-02-Final.pdf>. <https://www.bcnuej.org/wp-content/uploads/2026/04/CUBE-report-BCNUEJ-corregido-02-Final.pdf>.
- 77 Gemeente Utrecht. 'Our Vision for Utrecht in 2040'. <https://healthyurbanliving.utrecht.nl/our-vision-for-utrecht-in-2040>.
- 78 Tallinn Mobility Administration. 'Public Transport Tallinn'. <https://www.tallinn.ee/en/mobility/public-transport>.
- 79 Kębłowski, Wojciech. 'Degrowth Is Coming to Town: What Can It Learn from Critical Perspectives on Urban Transport?' Urban Studies 60, no. 7 (2023): 1249–65. <https://doi.org/10.1177/00420980221149825>.

- 80 Morozov, E. (2022) Critique of techno-feudal reason, *New Left Review*, 133, pp. 89–126.
- 81 Soumik Sarkar. Platform Capitalism and the Gig Economy: Surplus Value Extraction in the Age of Algorithmic Labor. *Socialism and Democracy*, 39:1-2, (2025): 227-249. <https://doi.org/10.1080/08854300.2025.2520478>
- 82 Bonn Juego, Tereza Østbø Kuldova, and Gerard Rinse Oosterwijk, Algorithms by and for the Workers: Towards a Fair, Democratic and Humane Digitalisation of the Workplace (Brussels: Foundation for European Progressive Studies, 2024), studies, 2024), <https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/2024/01/PS-Algorithms-by-and-for-the-workers.pdf>.
- 83 Lynch, C. R. Contesting digital futures: Urban politics, alternative economies, and the movement for technological sovereignty in Barcelona. *City*, 23(2). (2019):82–196.
- 84 Berlinguer, M. "Digital commons as new infrastructure: A new generation of public policy for digital transformation. *Umanistica Digitale*, 11(5). (2021): 5-25. <https://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/13695>
- 85 Para obtener descripciones más detalladas y ejemplos de estas políticas, véase: Desk studie Democratische Technologie, Commons Network, 2025. <https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2026/01/En-deskstudie-voor-democratische-technologie.pdf>



**Co-funded by
the European Union**

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de él o los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de ellos.

Licencia CC BY 4.0

Ciudades más allá del crecimiento

A medida que las ciudades de todo el mundo se enfrentan a una desigualdad social cada vez mayor, junto con un colapso ecológico en pleno desarrollo, es hora de trazar un rumbo diferente.

Las ciudades son el lugar donde más se necesita el cambio y donde este puede tener mayor impacto: la mayoría de la población vive en ellas, la vida económica se configura allí de forma más directa y las prácticas adoptadas en una ciudad pueden extenderse a otras. Esto las convierte en el lugar idóneo para llevar a cabo una transformación audaz y sistémica hacia una economía basada en la suficiencia y el cuidado, con la democracia como eje central.

Esta guía ofrece ejemplos concretos, vías estratégicas y recomendaciones de políticas en cinco ámbitos de necesidades sociales y básicas: energía, vivienda, alimentación, movilidad y tecnología digital. Para los responsables políticos, los y las profesionales, las personas investigadoras y todas aquellas que trabajan para transformar las ciudades, proporciona tanto inspiración como orientación práctica para construir ciudades en las que las personas y el planeta puedan prosperar dentro de los límites planetarios.